COLEGIO DE ESCRIBANOS CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA
ACTUACION NOTARIAL LEY 404
MARIA CECILIA DIFORTE MAT. 5336 ESCRIBANA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 1
N 023433515

FOLIO 2.051.- PRIMERA COPIA.- CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN CIVIL.- "OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO - O.D.I.A.- ASOCIACION CIVIL".- ESCRITURA NÚMERO: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO.- En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, ante mí, Escribana Autorizante, **COMPARECEN** las siguientes personas que se identifican y expresan sus datos personales como se indica a continuación, manifestando tener plena capacidad para el otorgamiento del presente acto: **Matías Daniel OTERO**, argentino, nacido el 1 de octubre de 1988, casado en primeras nupcias con Stephanie Yesilcimen, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 34.098.950, C.U.I.T. 20-34098950-4, con domicilio en la Avenida Córdoba 3547 Piso 6° Departamento "3" de esta ciudad; **Guido VILARIÑO**, argentino, nacido el 5 de junio de 1983, soltero, hijo de José Daniel Vilariño y Liliana Mabel Covatto, ingeniero, titular del Documento Nacional de Identidad número 30.335.410, C.U.I.T. 20-30335410-8, con domicilio en Avenida Figueroa Alcorta 7184 Piso 6° Departamento "A" de esta ciudad; **Adriano RUGANI**, argentino, nacido el 20 de septiembre de 1994, soltero, hijo de Guillermo Rugani y Andrea Marbian, estudiante, titular del Documento Nacional de Identidad número 38.522.069, C.U.I.L. 20-38522069-4; con domicilio en la calle Aconcagua 300, Escobar, Provincia de Buenos Aires; **Juan Emilio RIBERA**, argentino, nacido el 7 de febrero de 1985, soltero, hijo de Emilio José Ramón Ribera y Ana María Raimondi, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 31.464.597, C.U.I.L. 23-31464597-9, con domicilio en la calle Mercedes 548 de esta ciudad; **Tomás Francisco POMAR**, argentino, nacido el 31 de marzo de 1986, soltero, hijo de Mario Arturo Pomar y Dora Elvira Melito, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 32.318.385, C.U.I.L. 27-32318385-1, con domicilio en la calle Arcos 2966 Piso 4° De-

partamento "A" de esta ciudad; **Rodrigo Nicolás PEREIRA MOSQUERA**, argentino, nacido el 16 de diciembre de 1986, soltero, hijo de Osvaldo Ricardo Pereira e Isabel Silvia Mosquera, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 32.760.858, C.U.I.L. 20-32760858-5, con domicilio en la calle Camarones 4923 departamento 4 de esta ciudad; **Víctor Atila CASTILLEJO ARIAS**, argentino, nacido el 16 de junio de 1991, soltero, hijo de Víctor Leopoldo Castillejo Rivero y Eugenia Arias Cebollada, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 19.054.367, CU.I.T. 20-19054367-7, con domiclio en la calle General Ramón Freire 4439 de esta ciudad; **Manuel Ignacio BRIZUELA**, argentino, nacido el 17 de julio de 1982, soltero, hijo de Juan Genaro Brizuela y Cristina Guadalupe Traverso, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 29.527.872, C.U.I.T. 20-29527872-3, con domicilio en Sinclair 2965 Piso 11° Departamento "C" de esta ciudad; y **Eliana ANDRADE**, argentina, nacida el 21 de diciembre de 1985, soltera, hija de Oscar Eduardo Andrade y Sonia Mabel Uribarri, empleada, titular del Documento Nacional de Identidad número 31.984.419, C.U.I.L. 27-31984419-3, con domicilio en Pasaje Anasagasti 2016 Piso 4° Departamento "J" de esta ciudad.- Identifico a los comparecientes en los términos del artículo 306 inciso "a" del Código Civil y Comercial de la Nación por exhibir los documentos idóneos reseñados precedentemente, cuyas copias en lo pertinente debidamente autenticadas anexo a la presente.- **INTERVIENEN:** todos por sí y **DICEN: I.** Que en Buenos Aires, Argentina, en el día de la fecha veintiun días de noviembre de dos mil dieciocho todos los comparecientes resuelven constituir una entidad bajo la forma de asociación civil, de conformidad al acta fundacional que a continuación se instrumenta: **ACTA FUNDACIONAL: PRIMERO:** La asociación civil que se constituye en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en el día de la fecha, veintiún días de noviembre del año dos mil dieciocho, se denomina **"OBSERVATORIO DE DERECHO IN-**

FORMÁTICO ARGENTINO - O.D.I.A.- ASOCIACION CIVIL".- SEGUNDO: La asociación tiene duración indeterminada. Se domicilia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualmente establece su sede en la calle Arcos 2966 Piso 4°/A de esta Ciudad.- **TERCERO:** Son sus propósitos, sin fines de lucro: llevar adelante todas las acciones tendientes a motivar el adecuado ejercicio de los Derechos Constitucionales, tanto individuales como colectivos, por parte de toda la ciudadanía en el territorio de la República Argentina. Podrá promover, promocionar, concretar, proteger y garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía en todas las manifestaciones y realidades derivadas de las nuevas tecnologías, en el marco de la democracia, los derechos humanos y el respeto a los diversos grupos sociales, étnicas y religiosas. A su vez estará facultada para realizar y promover toda actividad de servicio tendiente a satisfacer necesidades de carácter pedagógico, cultural, social, económico, judicial y administrativo a fines de procurar y defender la defensa del adecuado ejercicio de la comunidad en el marco de las nuevas realidades digítales e informáticas. Propender a la defensa de los legítimos intereses de los desarrolladores y usuarios así como de las personas vinculadas a la producción de contenidos y sistemas informáticos o digitales, promoviendo su participación activa en la vida social y cultural de la sociedad. Trabajar en el fortalecimiento de las condiciones materiales de desarrollo de las actividades relacionadas a las nuevas tecnologías, facilitando el acceso por parte de las personas vinculadas a la informática a los recursos materiales y legales necesarios para el desarrollo de sus actividades. Desarrollar diversos programas de educación y fomento de las nuevas tecnologías de la información, en todas sus manifestaciones, orientados a facilitar el acceso por parte de la comunidad a distintas manifestaciones, servicios y herramientas digitales. Trabajar junto a las autoridades competentes en la búsqueda del fortalecimiento de la adecuada protección legal de los progresos tecnológicos, así como en la salvaguarda de los derechos de la comunidad con relación a es-

tas invenciones. Podrá fomentar así como coordinar la realización de diversas actividades de interés artístico, académico o de otra índole vinculadas al fomento de la cultura digital en todas sus expresiones. Podrá coordinar, cooperar y participar activamente con las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales a fin de dar cumplimiento a todas las acciones que hacen a este objeto social.- **Todas las actividades que la entidad realice serán sin fines de lucro**.- **CUARTO:** El patrimonio inicial queda establecido en la suma de Pesos Mil ($1000) que los socios aportan íntegramente por partes iguales cada uno de ellos y que en cumplimiento de la obligación de efectuar la integración de los aportes dinerarios, los administradores nombrados en éste acto reciben en dicho concepto, de conformidad y a los fines indicados, de manos de los socios.- **CUARTO: COMISIÓN DIRECTIVA:** Queda designada la primera Comisión Directiva por el término de cuatro años, integrada por: **PRESIDENTE:** Tomas Francisco POMAR; **SECRETARIO:** Rodrigo Nicolas PEREIRA MOSQUERA; **TESORERO:** Matías Daniel OTERO. Todos los miembros de la Comisión Directiva aceptan expresamente los cargos, constituyen domicilio especial en la calle Arcos 2966 Piso 4°/A de esta Ciudad y declaran bajo juramento que no se encuentran inhabilitados para ejercer los cargos para los cuales fueron designados. Asimismo y en cumplimiento de la Resolución General IGJ número 02/2012 manifiestan que conocen el contenido de la Resolución UIF N° 11/2011 y el listado establecido en el artículo 1° de la misma, declarando bajo juramento no estar incluidas en el listado de Personas Políticamente Expuestas.- Se prescindirá del Órgano de Fiscalización dado a que actualmente hay menos de cien (100) Asociados.- **SEXTO:** por unanimidad queda aprobado el texto del estatuto social que a continuación se describe.- **SÉPTIMO:** otorgan poder a los escribanos Pablo Hernán DE SANTIS, Matrícula 5335 y/o María Cecilia DIFORTE, Matrícula 5336 y/o María Sol de las Nieves VERA, titular del Documento Nacional de Identidad número 34.907.

507, y/o Sergio CORTESE, titular del Documento Nacional de Identidad número 22.653.921, para que indistintamente puedan correr con el diligenciamiento del presente y solicitar a la Inspección General de Justicia el otorgamiento de la personería jurídica, con facultad para efectuar modificaciones a la denominación, otorgar escrituras complementarias, aclaratorias y rectificatorias, interponer recursos y sostenerlos, suscribir edictos, presentar y retirar documentación, tomar vista del expediente y en general ejercer cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren conducentes para el mejor cumplimiento del presente, que podrán sustituir.- **II.** Que los comparecientes requieren mi intervención para otorgar la presente escritura de constitución de una asociación civil que se regirá por el presente: **ESTATUTO SOCIAL: TÍTULO I: DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL.- <u>ARTÍCULO PRIMERO</u>**: Con la denominación de **"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO - O.D.I.A.- ASOCIACION CIVIL"**, a los veintiún días de noviembre de dos mil dieciocho, se constituye una entidad sin fines de lucro con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país. La asociación tiene duración indeterminada.- **<u>ARTÍCULO SEGUNDO</u>**: Son sus propósitos, sin fines de lucro: llevar adelante todas las acciones tendientes a motivar el adecuado ejercicio de los Derechos Constitucionales, tanto individuales como colectivos, por parte de toda la ciudadanía en el territorio de la República Argentina. Podrá promover, promocionar, concretar, proteger y garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía en todas las manifestaciones y realidades derivadas de las nuevas tecnologías, en el marco de la democracia, los derechos humanos y el respeto a los diversos grupos sociales, étnicas y religiosas. A su vez estará facultada para realizar y promover toda actividad de servicio tendiente a satisfacer necesidades de carácter pedagógico, cultural, social, económico, judicial y administrativo a fines de procurar y defender la defensa del adecuado

ejercicio de la comunidad en el marco de las nuevas realidades digítales e informáticas. Propender a la defensa de los legítimos intereses de los desarrolladores y usuarios así como de las personas vinculadas a la producción de contenidos y sistemas informáticos o digitales, promoviendo su participación activa en la vida social y cultural de la sociedad. Trabajar en el fortalecimiento de las condiciones materiales de desarrollo de las actividades relacionadas a las nuevas tecnologías, facilitando el acceso por parte de las personas vinculadas a la informática a los recursos materiales y legales necesarios para el desarrollo de sus actividades. Desarrollar diversos programas de educación y fomento de las nuevas tecnologías de la información, en todas sus manifestaciones, orientados a facilitar el acceso por parte de la comunidad a distintas manifestaciones, servicios y herramientas digitales. Trabajar junto a las autoridades competentes en la búsqueda del fortalecimiento de la adecuada protección legal de los progresos tecnológicos, así como en la salvaguarda de los derechos de la comunidad con relación a estas invenciones. Podrá fomentar así como coordinar la realización de diversas actividades de interés artístico, académico o de otra índole vinculadas al fomento de la cultura digital en todas sus expresiones. Podrá coordinar, cooperar y participar activamente con las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales a fin de dar cumplimiento a todas las acciones que hacen a este objeto social.- Los honorarios de los profesionales que se contrataren estarán a cargo de la entidad. **Todas las actividades que la entidad realice serán sin fines de lucro**.- **TÍTULO II.- CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSOS SOCIALES.- ARTÍCULO TERCERO**: La asociación está capacitada para adquirir derechos y contraer obligaciones. Podrá adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenarlos, gravarlos o permutarlos como así también realizar cuanto acto jurídico sea necesario o conveniente para el mejor cumplimiento de su objeto social. Podrá firmar contratos de todo tipo y operar con instituciones bancarias públicas y privadas.- **ARTÍCULO CUARTO**: El patrimo-

nio se compone de los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo sucesivo por cualquier título y de los recursos que obtenga por: 1) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que abonen los asociados. 2) Las donaciones, herencias, legados, subvenciones y las rentas de sus bienes. 3) El producto de entradas, beneficios, eventos, cursos, talleres, conferencias y seminarios, asesoramiento a instituciones, y de toda otra entrada que pueda obtener lícitamente de conformidad al carácter no lucrativo de la institución; todo ello sin fines de lucro.- **TÍTULO III.- ASOCIADOS, CONDICIONES DE ADMISIÓN, RÉGIMEN DISCIPLINARIO.- ARTÍCULO QUINTO**: Se establece la siguiente categoría de asociados: a) SOCIOS ACTIVOS: son las personas físicas mayores de 18 años de edad y que estén de acuerdo con las actividades y los objetivos de la Asociación y soliciten su afiliación a la entidad en tal carácter y sean aceptados por la Comisión Directiva, bajo declaración del candidato de comprometerse a cumplir con las obligaciones emergentes respecto de su condición de asociado. b) SOCIOS BENEFACTORES: Serán aquellas personas físicas mayores de 18 años de edad que aporten a la institución la contribución que establezca periódicamente la Asamblea de Asociados para esta categoría de asociados.- c) SOCIOS HONORARIOS: toda persona mayor de 18 años que, en atención a los servicios prestados a la entidad, o dadas sus condiciones personales relevantes, o bien por cualquier otra circunstancia que lo haga merecedor de tal distinción, sean designados por la Asamblea por una mayoría especial de dos tercios de los socios presentes, a propuesta de la Comisión Directiva o de un grupo de asociados con derecho a voto que representen no menos del treinta por ciento del padrón respectivo al cierre del último ejercicio social. La pertenencia a esta categoría es una mera mención honorífica, y por tanto no implica reconocer derechos ni imponer obligaciones. Los socios honoríficos que deseen tener los mismos derechos que los activos deberán solicitar su admisión en esta categoría, a cuyo efecto se ajustarán a las condiciones que el pre-

sente estatuto exige para la misma. d) SOCIOS VITALICIOS: los que hayan pertenecido a la asociación en el carácter de socios activos y/o benefactores durante veinticinco años continuados o con interrupciones, y no hayan sido nunca sancionados por incumplimiento de los deberes que les impone este estatuto a las mencionadas categorías de socios. Quedarán liberados del pago de la cuota social a partir del mes siguiente al del cumplimiento de dicha antigüedad, previa aprobación de la Comisión Directiva. En todo lo demás mantendrán las mismas condiciones correspondientes a la categoría de asociado que revestían al momento del cambio. De tal modo, si pertenecían a la categoría de asociados activos conservarán el derecho a voz y voto en las asambleas, a elegir y a ser elegido para ocupar cargos en los órganos de fiscalización o administración.- **ARTÍCULO SEXTO**: Los SOCIOS ACTIVOS tienen las siguientes obligaciones y derechos: a) abonar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que establece la Asamblea; b) cumplir las demás obligaciones que imponga el estatuto, reglamento y resoluciones de Asamblea y Comisión Directiva; c) comunicar sus cambios de domicilio y de correo electrónico dentro de los 15 días de producidos; d) participar con voz y voto en las Asambleas y ser elegidos para integrar los órganos sociales, cuando tengan una antigüedad mínima de dos años y sean mayores de edad.- **ARTÍCULO SÉPTIMO**: Perderá su carácter de asociado aquel que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas por este Estatuto para serlo. Se perderá también el carácter de asociado por fallecimiento, expulsión o renuncia. El asociado que se atrase en el pago de tres cuotas, o de cualquier otra contribución establecida, será notificado fehacientemente de su obligación de ponerse al día con la Tesorería Social. Pasado un mes de la notificación sin que hubiere regularizado su situación, la Comisión Directiva podrá declarar la cesantía del socio moroso. El socio declarado cesante por morosidad, podrá incorporarse nuevamente a la entidad, siempre que sea expresamente aceptado por la Comisión Directiva y sin perjuicio de lo cual a los efectos de

la antigüedad la misma se considerará perdida, computándose la misma a partir de su nueva incorporación.- **ARTICULO OCTAVO**: La Comisión Directiva podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones: a) Amonestación, b) Multas, c) Suspensión, su plazo máximo no podrá exceder de un año. Podrá reingresar con pérdida de su antigüedad; d) Exoneración o expulsión, en este caso no hay posibilidad de reingreso. Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta, en los siguientes casos: 1) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Estatuto, Reglamentos o Resoluciones de las Asambleas y la Comisión Directiva. 2) Hacer voluntariamente daño a la asociación, provocar desórdenes graves en su seno u observar una conducta que sea notoriamente perjudicial a los intereses sociales. 3) Comisión de delitos penales, cuya gravedad torne incompatible su continuidad dentro del seno de la asociación. Podrá disponerse preventivamente la suspensión del asociado mientras dure la tramitación del proceso.- **ARTÍCULO NOVENO**: Las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior serán resueltas por la Comisión Directiva, previa defensa del inculpado. En todos los casos, el afectado podrá interponer dentro del término de 30 días de notificado de la sanción el recurso de apelación por ante la primera asamblea que se celebre. La interposición del recurso tendrá efecto suspensivo. En cuanto a sus derechos de asociado, en el supuesto de ejercer el socio sancionado un cargo dentro de los Órganos de Administración o Fiscalización, podrá ser suspendido por dicho órgano en ese carácter, hasta tanto resuelva su situación la Asamblea respectiva.- **TÍTULO IV.- COMISIÓN DIRECTIVA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO**: La asociación será dirigida y administrada por una Comisión Directiva que podrá estar compuesta por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros titulares, que desempeñarán los siguientes cargos: De designarse el mínimo de miembros: Presidente, Secretario, Tesorero. De designarse más de tres miembros los demás cargos serán los que resuelva la Asam-

blea, como ser Vicepresidente, Prosecretario, protesorero, vocales y podrán designarse igual o menor número de miembros suplentes con el cargo de vocal suplente.- El mandato de los mismos durará cuatro ejercicios.- Deberá además formarse un Órgano de Fiscalización compuesto por uno a tres miembros titulares y un miembro suplente, con el cargo de revisores de cuentas, en el caso de que la Asociación supere los cien (100) asociados).- Podrá prescindirse del Órgano de Fiscalización siempre que haya menos de cien (100) Asociados.-El mandato en todos los casos tendrá una duración de cuatro años. En todos los casos los mandatos son únicamente revocables por la Asamblea.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO**: Para integrar la Comisión Directiva se requiere ser socio activo, con una antigüedad de dos años en tal carácter y encontrarse al día con la tesorería.- Podrán designarse como integrantes del órgano de fiscalización a personas no asociadas con los alcances previstos en el Artículo 173 del Código Civil y Comercial de la Nación.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO**: En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que ocasione la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, el mismo será desempeñado por quien corresponda según el orden de lista. Los reemplazos se harán por el tiempo de la ausencia transitoria, o por lo que resta del mandato del reemplazado si fuera definitivo. Si el número de miembros de la Comisión Directiva quedara reducido de manera que imposibilite formar quorum , habiendo sido llamado todos los suplentes a reemplazar a los titulares, los restantes deberán convocar a Asamblea dentro de los 15 días para celebrarse dentro de los 30 días siguientes, a los efectos de su integración. En caso de vacancia total del cuerpo, el Órgano de Fiscalización cumplirá dicha convocatoria, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que incumban a los miembros directivos renunciantes. En ambos casos, el órgano que efectúa la convocatoria tendrá las facultades inherentes a la celebración de la Asamblea o de los comicios.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO**La Comisión Directiva se reunirá u-

na vez por mes, en el día y hora que determine en su primera reunión anual y además, toda vez que sea citada por el Presidente o a pedido del Órgano de Fiscalización o tres de sus miembros, debiendo en estos últimos casos celebrarse la reunión dentro de los 7 días de formulado el pedido. La citación se hará por correo electrónico; en el caso de no obtenerse la confirmación de su recepción dentro de los cinco (5) días corridos de remitido, deberá convocarse por circulares dirigidas a los domicilios denunciados ante la entidad con cinco días de anticipación como mínimo.- Las reuniones se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requiriéndose para las resoluciones el voto de igual mayoría de los presentes, salvo para las reconsideraciones que requiere el voto de las dos terceras partes, en sesión de igual o mayor número de asistentes de aquella en que se resolvió el tema a reconsiderar.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO**: Son atribuciones y deberes de la Comisión Directiva: a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los Reglamentos, interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre; b) Ejercer la administración de la asociación; c) Convocar a asambleas; d) Resolver la admisión de los que solicitan ingresar como socios. La solicitud de ingreso deberá ser presentada por dos socios que tengan una antigüedad mínima de dos años en la entidad y la Comisión Directiva se reserva el derecho de rechazar la/s solicitud/es de admisión, en el caso de considerar que el postulante no condice con el espíritu de la asociación.- e) Cesantear o sancionar a los asociados; f) Nombrar al personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social, fijarle el sueldo, determinarle las obligaciones, sancionarlo y despedirlo; g) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización. Todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los socios con la anticipación requerida por el artículo 23 para la convocatoria a Asamblea Ordinaria; h)

Realizar los actos que especifican los artículos 375 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, con cargo de dar cuenta a la primera Asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición y enajenación de inmuebles y constitución de gravámenes sobre gastos en que será necesaria la autorización previa de la Asamblea; i) Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las que deberán ser aprobadas por la Asamblea y presentadas a la Inspección General de Justicia a los efectos determinados por el artículo 10 inc K Ley 22.315 y demás normativa pertinente de dicho organismo, sin cuyo requisito no podrán entrar en vigencia. Exceptúense aquellas reglamentaciones que no tengan contenido estatutario.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO**: El Órgano de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Controlar permanentemente los libros y documentación contable respaldatoria de los asientos volcados, fiscalizando la administración, comprobando el estado de caja y la existencia de los fondos, títulos y valores; b) Asistir a las sesiones de Comisión Directiva cuando lo estime conveniente, con voz y sin voto, no computándose su asistencia a los efectos del quorum. c) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los socios y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales; d) Anualmente, dictaminará sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos presentadas por la Comisión Directiva a la asamblea ordinaria al cierre del ejercicio; e) Convocará a Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva, previa intimación fehaciente a la misma por el término de 15 días; f) Solicitará la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo los antecedentes que fundamentan su pedido en conocimiento de la Inspección General de Justicia cuando se negare a ello la Comisión Directiva; g) Convocar, dando cuenta al Organismo de Control, a Asamblea Extraordinaria, cuando ésta fuera solicitada infructuosamente a la Comisión Directiva por los asociados, de conformi-

dad con los términos del artículo 23; h) Vigilará las operaciones de liquidación de la asociación. El Órgano de Fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social.- **TÍTULO V.- DEL PRESIDENTE.-** **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO**: Corresponde al Presidente o a quien lo reemplace estatutariamente: a) Ejercer la representación de la asociación; b) Citar a las Asambleas y convocar a las sesiones de la Comisión Directiva y presidirla. c) Tendrá derecho a voto en las sesiones de la Comisión Directiva al igual que los demás miembros de todo el cuerpo y, en caso de empate, votará nuevamente para desempatar; d) Firmar con el Secretario las actas de las asambleas, y de la Comisión Directiva, la correspondencia y todo documento de la asociación; f) Dirigirá las discusiones, suspenderá y levantará las sesiones de la Comisión Directiva y Asambleas cuando se altere el orden y falte el respeto debido; g) Velará por la buena marcha y administración de la asociación, observando y haciendo observar el Estatuto, Reglamentos, las Resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva. h) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las resoluciones en los casos imprevistos. En ambos supuestos ser "ad-referéndum" de la primera reunión de Comisión Directiva. i) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos, y demás documentos de la tesorería, de acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva. No permitirá que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo prescripto por el presente estatuto.- **TÍTULO VI.- DEL SECRETARIO.-** **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO**: Corresponde al Secretario o a quien lo reemplace estatutariamente: a) Asistir a las Asambleas y sesiones de Comisión Directiva, redactando las actas respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el Presidente; b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la asociación; c) Citar a las sesiones de la Comisión Directiva de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13; d) Llevar el Libro de Actas y, conjuntamente con el Te-

sorero, el Registro de Asociados.- **TÍTULO VII.- DEL TESORERO.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO**: Corresponde al Tesorero o a quien lo reemplace estatutariamente: a) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas; b) Llevar conjuntamente con el Secretario el Registro de Asociados. Ser responsable de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales; c) Llevar los libros de contabilidad; d) Presentar a la Comisión Directiva balances mensuales y preparar, anualmente, el Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario correspondientes al ejercicio vencido, que previa aprobación de la Comisión Directiva serán sometidos a la Asamblea Ordinaria; e) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería efectuando los pagos resueltos por la Comisión Directiva; f) Depositar en una institución bancaria a nombre de la asociación y a la orden conjunta del Presidente y Tesorero, los fondos ingresados a la Caja Social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que la Comisión Directiva determine; g) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva y al Órgano de Fiscalización toda vez que se lo exija.- **TÍTULO VIII.- DE LOS VOCALES.- ARTÍCULO DECIMO NOVENO**: Corresponde a los vocales titulares: a) Asistir a asambleas y sesiones de la Comisión Directiva con voz y voto; b) Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les confíe.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**: Corresponde al vocal suplente entrar a formar parte de la Comisión Directiva en las condiciones previstas en este estatuto; Podrá recurrir a las sesiones de la Comisión Directiva con derecho a vos pero no a voto.- No será computable su asistencia a los efectos del quórum.- **TÍTULO IX.- ASAMBLEAS.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO**: Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio cuya fecha de clausura será el 31 de diciembre de cada año y en ellas se deberá : a) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe del Órgano de Fiscalización; b) Elegir, en su caso, los miembros de los órganos sociales; c) Fijar la cuota social y determinar las pautas para su actualización, las que serán instrumentadas por la Comisión Directiva; d) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día; e) Tratar los asuntos propuestos por un mínimo del 5% de los socios y presentados a la Comisión Directiva dentro de los 30 días de cerrado el ejercicio anual.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO**: Las Asambleas extraordinarias serán convocadas siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario, o cuando lo soliciten el Órgano de Fiscalización o el 20% de los socios con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término de 10 días y celebrarse la asamblea dentro del plazo de 30 días y si no se tomase en consideración la solicitud o se negare infundadamente, podrán requerirse en los mismos términos y procedimiento al Órgano de Fiscalización quien la convocará o se procederá de conformidad con lo que determine el artículo 10 inciso i) de la Ley 22.315 o norma que en el futuro la reemplace.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** Las Asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los socios con 20 días de anticipación. Las Asambleas se notificarán con veinte (20) días corridos de anticipación al correo electrónico declarado por el asociado; en el caso de no obtenerse la confirmación de su recepción dentro de los cinco (5) días corridos de remitido, deberá convocarse a los asociados por circulares enviadas al último domicilio conocido en la entidad con una anticipación de por lo menos quince (15) días corridos a la celebración del acto. Con la misma antelación deberán ponerse a consideración de los socios la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización. Cuando se someta a consideración de la Asamblea reformas al Estatuto o Reglamentos, el proyecto de las mismas deberá ponerse a disposición de los socios con idéntico plazo y deberá incluir comparativamente los textos vigentes y los proyectos de

modificación que se pondrán a consideración o hacer constar expresamente que los textos reformados se hallan a disposición para ser retiradas de la sede social. En las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos expresamente en el Orden del Día salvo que se encontrare la totalidad de los asociados con derecho a voto, y se votare por unanimidad la incorporación del tema. Se admite el voto por poder, excepto para actos de elección de autoridades. En las Asambleas los socios solo podrán representar por poder a un solo asociado de idéntica categoría mediante carta poder especial otorgada a ese efecto.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO**: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Serán presididas por el Presidente de la entidad. En caso de ausencia o impedimento del Presidente de la entidad, la presidirá quien sea elegido por mayoría de votos emitidos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO**: Las resoluciones se adoptarán, en todos los casos, por mayoría absoluta de votos emitidos. Ningún socio podrá tener más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión. Los socios que se incorporen una vez iniciado al acto sólo tendrán voto en los puntos aún no resueltos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO**: Con la anticipación prevista por el artículo 23, se pondrá a exhibición de los asociados el padrón de los que están en condiciones de intervenir, quienes podrán efectuar reclamos hasta 5 días antes del acto, los que deberán resolverse dentro de los dos días siguientes. No se excluirá del padrón a quienes, pese a no estar al día con Tesorería, no hubieran sido efectivamente cesanteados. Ello sin perjuicio de privársele de su participación en la Asamblea si no abonan la deuda pendiente, hasta el momento de inicio de la misma. Para la elección de autoridades se adopta el sistema de voto secreto y directo,

por la lista completa de candidatos, no siendo admisible el voto por poder. Las listas de candidatos a autoridades deberán ser presentadas con no menos de diez días de antelación, debiendo la Comisión Directiva pronunciarse dentro de las 48 horas siguientes sobre la procedencia de su oficialización. En caso de objeciones, los apoderados podrán subsanarla hasta 24 horas de notificado.- **TÍTULO X.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO**: La Asamblea no podrá decretar la disolución de la asociación mientras haya una cantidad de asociados dispuestos a sostenerla, que posibilite el regular funcionamiento de los órganos sociales. De hacerse efectiva la disolución se designarán los liquidadores que podrán ser la misma Comisión Directiva o cualquier otra comisión de asociados que la Asamblea designe. Una vez pagadas las deudas, el remanente de bienes se destinará a una entidad de bien común, sin fines de lucro con personería jurídica, domicilio en el país y reconocida como exenta por la AFIP u organismo que en el futuro la sustituya, o al estado nacional, provincial o municipal.- La destinataria del remanente de bienes será designada por la Asamblea de disolución.- **TÍTULO XI.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO**: No se exigirán las antigüedades requeridas en los artículos 6 inciso d y 11 durante los primeros 2 años desde la constitución de la entidad. De esta manera aprueban y dejan formalizado el estatuto. **Y YO LA ESCRIBANA AUTORIZANTE** hago constar: Que en cumplimiento de la obligación de efectuar la integración de los aportes dinerarios, los administradores nombrados en este acto reciben el dinero en dicho concepto, de conformidad y a los fines indicados, de manos de los socios, ante mí de lo que certifico y doy fe.- **LEO** a los comparecientes que la otorgan y firman ante mí, doy fe.- **Matías Daniel OTERO.- Guido VILARIÑO.- Adriano RUGANI.- Juan Emilio RIBERA.- Tomás Francisco POMAR.- Rodrigo Nicolás PEREIRA MOSQUERA.- Víctor Atila CASTILLEJO ARIAS.- Manuel Ignacio BRIZUELA.- E-**

N 023433523

liana **ANDRADE**.- (Están sus firmas).- Está mi firma y mi sello: MARIA CECILIA DIFORTE.- **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mi al folio 2.051 del Registro Notarial 926 de mi adscripción.- Para la Asociación expido esta **Primera Copia** en nueve sellos de Actuación Notarial números N 023433515/16/17/18/19/20/21/22 y el presente que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.- Entrelíneas: "Departamento"; "Departamento": Vale.

MARIA CECILIA DIFORTE
MAT. 5336
ESCRIBANA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

BUENOS AIRES, 28 FEB 2019

VISTO: el expediente Nº 1.934.987/7.966.793, en el que la entidad denominada: **"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO-O.D.I.A.-ASOCIACIÓN CIVIL"** solicita autorización para funcionar y,

CONSIDERANDO:

Que la entidad satisface los requerimientos establecidos por los artículos 168, 174 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Que la presente encuadra en las facultades conferidas al Sr. Inspector General por los artículos 10 inciso a), 21 inciso a) y concordantes de la ley Nº 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Autorízase para funcionar a la entidad denominada: **"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO-O.D.I.A.-ASOCIACIÓN CIVIL"**, constituida el 21 de noviembre de 2018 y apruébase su estatuto instrumentado en escritura pública Nº 464 y 36 obrantes a fs. 1/10 y 30/31 (cuyas copias obran a fs. 11/20 y 32/33). ----------

ARTÍCULO 2º: Ordénase la inscripción en el Registro Público conforme lo dispuesto por el art. 169 del Código Civil y Comercial de la Nación. ----------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y entréguense los instrumentos de fs. 1/10 y 30/31. Gírese al Departamento Registral a los fines indicados en el art. 2º de la presente. ----------

La entidad deberá dar cumplimiento a los artículos 381 y 382 de la Resolución I.G.J. (G) 7/15 (rúbrica de libros).

Oportunamente, archívese.-

RESOLUCIÓN I.G.J. Nº

I.G.J.
SSP

SERGIO BRODSKY
INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. MARIANO CORONADO
JEFE
AREA DESPACHO GENERAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

COLEGIO DE ESCRIBANOS CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA
ACTUACION NOTARIAL
MAR. LEONORA DI PORTE MAT. 5336 ESCRIBANA
REFOLIADO Nº 30
N 023626868

FOLIO 108. PRIMERA COPIA. ESCRITURA RECTIFICATORIA DE CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN CIVIL.- "OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO - O.D.I.A.- ASOCIACION CIVIL".- ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y SEIS.- En la ciudad de Buenos A res, Capital de la República Argentina, a los siete días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, ante mí, Escribana Autorizante, **COMPARECE** la siguiente persona que se identifica y expresa sus datos personales como se indica a continuación, manifestando tener plena capacidad para el otorgamiento del presente acto: **María Sol de las Nieves VERA,** argentina, nacida el 08 de enero de 1990, soltera, titular del Documento Nacional de Identidad número 34.907.507, con domicilio en Presidente Roque Saenz Peña 628 piso 2° departamento A de esta ciudad.- Identifico a la compareciente en los términos del artículo 306 inciso "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, por ser de mi conocimiento.- **INTERVIENE** en nombre y representación y en su carácter de **APODERADA** de **Matías Daniel OTERO**, argentino, nacido el 1 de octubre de 1988, casado en primeras nupcias con Stephanie Yesilcimen, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 34.098.950, C.U.I.T. 20-34098950-4, con domicilio en la Avenida Córdoba 3547 Piso 6° Departamento "3" de esta ciudad; **Guido VILARIÑO**, argentino, nacido el 5 de junio de 1983, soltero, hijo de José Daniel Vilariño y Liliana Mabel Covatto, ingeniero, titular del Documento Nacional de Identidad número 30.335.410, C.U.I.T. 20-30335410-8, con domicilio en Avenida Figueroa Alcorta 7184 Piso 6° Departamento "A" de esta ciudad; **Adriano RUGANI**, argentino, nacido el 20 de septiembre de 1994, soltero, hijo de Guillermo Rugani y Andrea Marbian, estudiante, titular del Documento Nacional de Identidad número 38.522.069, C.U.I.L. 20-38522069-4; con domicilio en la calle Aconcagua 300, Escobar, Provincia de Buenos Aires; **Juan Emilio RIBERA**, argentino, nacido el 7 de febrero de 1985, soltero, hijo de Emilio José Ramón Ribera y A-

na María Raimondi, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 31.
464.597, C.U.I.L. 23-31464597-9, con domicilio en la calle Mercedes 548 de esta ciudad;
Tomás Francisco POMAR, argentino, nacido el 31 de marzo de 1986, soltero, hijo de
Mario Arturo Pomar y Dora Elvira Melito, abogado, titular del Documento Nacional de
Identidad número 32.318.385, C.U.I.L. 27-32318385-1, con domicilio en la calle Arcos
2966 Piso 4º Departamento "A" de esta ciudad; **Rodrigo Nicolás PEREIRA MOS-**
QUERA, argentino, nacido el 16 de diciembre de 1986, soltero, hijo de Osvaldo Ricar-
do Pereira e Isabel Silvia Mosquera, abogado, titular del Documento Nacional de Iden-
tidad número 32.760.858, C.U.I.L. 20-32760858-5, con domicilio en la calle Camarones
4923 departamento 4 de esta ciudad; **Víctor Atila CASTILLEJO ARIAS**, argentino,
nacido el 16 de junio de 1991, soltero, hijo de Víctor Leopoldo Castillejo Rivero y Euge-
nia Arias Cebollada, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 19.
054.367, CU.I.T. 20-19054367-7, con domiclio en la calle General Ramón Freire 4439
de esta ciudad; **Manuel Ignacio BRIZUELA**, argentino, nacido el 17 de julio de 1982,
soltero, hijo de Juan Genaro Brizuela y Cristina Guadalupe Traverso, abogado, titular
del Documento Nacional de Identidad número 29.527.872, C.U.I.T. 20-29527872-3, con
domicilio en Sinclair 2965 Piso 11º Departamento "C" de esta ciudad; y **Eliana AN-**
DRADE, argentina, nacida el 21 de diciembre de 1985, soltera, hija de Oscar Eduardo
Andrade y Sonia Mabel Uribarri, empleada, titular del Documento Nacional de Identi-
dad número 31.984.419, C.U.I.L. 27-31984419-3, con domicilio en Pasaje Anasagasti
2016 Piso 4º Departamento "J" de esta ciudad, circunstancia que acredita con Poder Es-
pecial otorgado por Escritura Pública número 464, de fecha 21 de noviembre de 2018,
pasada ante mi al folio 2051 del Registro Notarial 926 de mi adscripción, el cual con fa-
cultades suficientes he tenido a la vista y a su matriz me remito.- Y en el carácter invoca-
do y acreditado y manifestando que la representación que invoca se encuentra plenamen-

MAT. 5336
ESCRIBANA
RESOLUCION Nº 31
N 023626869

te vigente, **DICE: PRIMERO**: Que sus representados otorgaron por la Escritura número 464 de fecha 21 de noviembre de 2018, antes relacionada el Estatuto Social de la **"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO - O.D.I.A.- ASOCIACION CIVIL"**, el cual se encuentra en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia.- **SEGUNDO:** Que por este acto viene en representación de sus mandantes a otorgar escritura rectificatoria de dicho Estatuto a fin de establecer las funciones del prosecretario y protesorero.- **TERCERO**: En virtud de lo expuesto se rectifica el título VI, artículo décimo séptimo y el título VII, artículo décimo octavo del Estatuto, quedando los mismos redactados como a continuación se indica: **TÍTULO VI.- DEL SECRETARIO y PROSECRETARIO.- <u>ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO</u>**: Corresponde al Secretario o a quien lo reemplace estatutariamente: a) Asistir a las Asambleas y sesiones de Comisión Directiva, redactando las actas respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el Presidente; b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la asociación; c) Citar a las sesiones de la Comisión Directiva de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13; d) Llevar el Libro de Actas y, conjuntamente con el Tesorero, el Registro de Asociados.- El Prosecretario colaborará con el Secretario en todas las tareas necesarias para el buen desempeño de estas funciones y en caso de ausencia justificada, renuncia o fallecimiento del secretario, lo reemplazará con iguales atribuciones y deberes. **TÍTULO VII.- DEL TESORERO y PROTESORERO.- <u>ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO</u>**: Corresponde al Tesorero o a quien lo reemplace estatutariamente: a) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas; b) Llevar conjuntamente con el Secretario el Registro de Asociados. Ser responsable de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales; c) Llevar los libros de contabilidad; d) Presentar a la Comisión Directiva balances mensuales y preparar, anualmente, el Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario corres-

pondientes al ejercicio vencido, que previa aprobación de la Comisión Directiva serán sometidos a la Asamblea Ordinaria; e) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería efectuando los pagos resueltos por la Comisión Directiva; f) Depositar en una institución bancaria a nombre de la asociación y a la orden conjunta del Presidente y Tesorero, los fondos ingresados a la Caja Social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que la Comisión Directiva determine; g) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva y al Órgano de Fiscalización toda vez que se lo exija.- El Protesorero colaborará con el Tesorero en todas las tareas necesarias para el buen desempeño de estas funciones y en caso de ausencia justificada, renuncia o fallecimiento del tesorero, lo reemplazará con iguales atribuciones y deberes. **CUARTO:** Solicita se expida primera copia de la presente a los efectos de complementar la escritura de constitución antes relacionada, y de su inscripción en forma conjunta con aquella.- **LEO** a la compareciente que la otorga y firma ante mí, doy fe.- **María Sol de las Nieves VERA.-** (Está su firma).- Está mi firma y mi sello: MARIA CECILIA DIFORTE.- **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mi al folio 108 del Registro Notarial 926 de mi adscripción.- Para la asociación expido esta **Primera Copia** en dos sellos de Actuación Notarial números N 023626868 y el presente que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MARIA CECILIA DIFORTE
MAT. 5336

Ministerio de Justicia
Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

BUENOS AIRES, 28 FEB 2019

VISTO: el expediente Nº 1.934.987/7.966.793, en el que la entidad denominada: **"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO-O.D.I.A.-ASOCIACIÓN CIVIL"** solicita autorización para funcionar y,

CONSIDERANDO:

Que la entidad satisface los requerimientos establecidos por los artículos 168, 174 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Que la presente encuadra en las facultades conferidas al Sr. Inspector General por los artículos 10 inciso a), 21 inciso a) y concordantes de la ley Nº 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Autorízase para funcionar a la entidad denominada: **"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO-O.D.I.A.-ASOCIACIÓN CIVIL"**, constituida el 21 de noviembre de 2018 y apruébase su estatuto instrumentado en escritura pública Nº 464 y 36 obrantes a fs. 1/10 y 30/31 (cuyas copias obran a fs. 11/20 y 32/33). ----------

ARTÍCULO 2º: Ordénase la inscripción en el Registro Público conforme lo dispuesto por el art. 169 del Código Civil y Comercial de la Nación. ----------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y entréguense los instrumentos de fs. 1/10 y 30/31. Gírese al Departamento Registral a los fines indicados en el art. 2º de la presente. ----------

La entidad deberá dar cumplimiento a los artículos 381 y 382 de la Resolución I.G.J. (G) 7/15 (rúbrica de libros).

Oportunamente, archívese.-

RESOLUCIÓN I.G.J. Nº

I.G.J.
SSP
mgP

SERGIO BRODSKY
INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. MARIANO CORONADO
JEFE
AREA DESPACHO GENERAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

MINISTERIO - INSPECCION GENE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1934987 **CUIT:**
ASOCIACION CIVIL
Razón Social :
OBSERVA DE DERECHO INFORMA ARGENTI- O.D.I.A. - ASOCIAC CIVIL
(antes):
Número de Trámite: 7966793
C.Trám. Descripción

00291 CONSTITUCION TRAM. PRECALIFICADO

Resolución Nª 97 Fecha de Resolución 28/02/2019

"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMATICO ARGENTINO - O.D.I.A. - ASOCIACION CIVIL".-//

Escritura/s 464 - 36-

y/o instrumentos privados: -

Inscripto en este Registro bajo el numero: 213
del libro: 2 AC , tomo: -
de: ASOCIACIONES CIVILES

C.C.: 1 Buenos Aires, 07 de Marzo de 2019

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0846850

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA
ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
MARIA CECILIA DIFORTE
MAT. 5336
ESCRIBANA
N 024314309

FOLIO 836. PRIMERA COPIA. PODER GENERAL JUDICIAL: "OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO - O.D.I.A.- ASOCIACION CIVIL" a favor de Victor Atila CASTILLEJO ARIAS y otros.- ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintitres días del mes de agosto del año dos mil diecienueve, ante mí Escribana autorizante, **COMPARECEN** las personas, que se identifican expresando sus datos como se indican a continuación, manifestando tener plena capacidad para el otorgamiento del presente acto: **Tomás Francisco POMAR**, argentino, nacido el 31 de marzo de 1986, soltero, hijo de Mario Arturo Pomar y Dora Elvira Melito, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 32.318.385, C.U.I.L. 27-32318385-1, con domicilio en la calle Arcos 2966 Piso 4º Departamento "A" de esta ciudad; **Rodrigo Nicolás PEREIRA MOSQUERA**, argentino, nacido el 16 de diciembre de 1986, soltero, hijo de Osvaldo Ricardo Pereira e Isabel Silvia Mosquera, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 32.760.858, C.U.I.L. 20-32760858-5, con domicilio en la calle Camarones 4923 departamento 4 de esta ciudad y **Matías Daniel OTERO**, argentino, nacido el 1 de octubre de 1988, casado en primeras nupcias con Stephanie Yesilcimen, abogado, titular del Documento Nacional de Identidad número 34.098.950, C.U.I.T. 20-34098950-4, con domicilio en la Avenida Córdoba 3547 Piso 6º Departamento "3" de esta ciudad; cuyas identidades han sido justificadas en los términos del artículo 306 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación. **INTERVIENEN** en nombre y representación y en sus carácteres de **PRESIDENTE, SECRETA-**

RIO Y TESORERO, respectivamente, de la asociación civil que gira en esta plaza bajo la denominación de **"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO - O.D.I.A.- ASOCIACION CIVIL"**, C.U.I.T. 30-71646782-8, con domicilio en la calle Arcos 2966 Piso 4° A de esta Ciudad, manifestando la plena vigencia de las representaciones invocadas por no haberles sido revocada ni limitada en forma alguna, lo que acreditan con Estatuto Social otorgado por Escritura número 464, de fecha 21 de noviembre de 2018, pasada ante mí, al folio 2051 de este Registro 926 de mi adscripción, y Escritura rectificatoria número 36 de fecha 7 de febrero de 2019 pasada al folio 108 del protocolo corriente, autorizada para funcionar por Resolución de IGJ número 97 de fecha 28 de febrero de 2019 e inscriptas conjuntamente en la Inspección General de Justicia el 7 de marzo de 2019, bajo el número 213 del Libro 2 AC de Asociaciones Civiles, Tomo de Sociedades de Responsabilidad Limitada.- La documentación en original y con facultades suficientes he tenido a la vista y a su matriz me remito.- Y en tal carácter **DICEN:** Que confieren **PODER GENERAL JUDICIAL** a favor de los doctores **Victor Atila CASTILLEJO ARIAS, DNI 19.054.367 y/o Matías Daniel OTERO, DNI 34.098.950 y/o Agustín MALPEDE, DNI 34.890.250 y/o Marina FLEGO EIRAS, DNI 35.983.907 y/o Manuel Ignacio BRIZUELA, DNI 29.527.872 y/o Martin Pablo SILVA VALENT, DNI 34.080.472,** para que cualquiera de ellos actuando en forma conjunta, alternada y/o indistinta, en nombre y representación de **OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO - O.D.I.A.- ASOCIACION CIVIL,** puedan realizar los siguientes actos: intervenir en todas las causas, asuntos,

cuestiones, pleitos y toda controversia judicial, ~~presentes o~~ futuros, de cualquier naturaleza, fuero o jurisdicción en que la parte otorgante tenga interés como parte actora, demandada, o en cualquier otro carácter, ante la Justicia Federal u Ordinaria de la Nación, de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poderes Públicos, Mediadores, especialmente Tribunales y Ministerios de Trabajo y Acción Social, S.E.C.L.O. y demás autoridades administrativas, como asimismo antes los correspondientes organismos internacionales de protección de los derechos humanos, pudiendo incluso interponer cualquier clase de reclamo administrativo contra cualquier organismo del gobierno nacional, provincial o municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos internacionales; pudiendo asimismo intervenir en todos los actos y trámites relacionados con la Ley de Mediación número 24.573 y Decreto 91/98 y todo trámite por ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) del Ministerio de Trabajo y Acción Social, concurrir a audiencias de todo tipo, con facultades para celebrar acuerdos conciliatorios judiciales y/o extrajudiciales.- A tales efectos los apoderados tendrán facultades para promover toda clase de acciones, realizar gestiones, presentar títulos, escritos y documentos de toda índole, recusar, declinar o prorrogar jurisdicciones, entablar, contestar o desistir demandas, allanarse, desistir del derecho o del proceso, oponer y contestar excepción de cualquier naturaleza, reconvenir, asistir a juicios orales, al cotejo de documentos y firmas o a exámenes periciales, interpelar, solicitar el nombramiento o remoción de administradores de bienes y auxiliares de justicia; hacer, aceptar o impugnar consignaciones y obligaciones, conceder esperas y acordar términos, interponer todo tipo de recursos legales y desistirlos, in-

cluida la apelación.- Iniciar y continuar hasta su total terminación juicios sucesiones de sus deudores, pidiendo aceptar o rechazar herencias y legados, pedir declaraciones de quiebras o concursos, aceptar, observar o rechazar concordatos y otros arreglos judiciales o extrajudiciales, deducir y contestar tercerías, intimar desalojos y lanzamientos, comprometer las causas en árbitros o amigables componedores legales o voluntarios, conciliar, requerir medidas conservatorias y compulsas de libros, argüir de falsedad, y nulidad, pedir y oponerse a declaraciones de rebeldía o decaimiento de derechos procesales, solicitar y oponerse a la acumulación de procesos o de acciones, aceptar y exigir juramentos, asistir a audiencias, citar de evicción, solicitar, diligenciar notificaciones, vistas, traslados, por medio de cédulas, oficios, exhortos, mandamientos, escrituras, reconocer documentos o firmas de la parte poderdante, anteriores o posteriores a este acto, demandar por daños, interrumpir u oponer prescripciones, oponer y absolver posiciones, producir e impugnar todo género de pruebas e informaciones, ofrecer testigos, peritos de parte, alegar e impugnar declaraciones, aceptar o rechazar transacciones y novaciones que extingan obligaciones aún anteriores a este poder, hacer arreglos judiciales o extrajudiciales, transar, solicitar, aceptar o rechazar divisiones de condominio, mensuras, deslindes, amojonamientos, particiones, tomar y dar posesión de bienes litigiosos, ratificar, rectificar, aclarar, confirmar y registrar actos jurídicos y contratos, otorgar y firmar los instrumentos públicos y privados que fueran menester con facultades extrajudiciales para practicar toda clase de intimaciones por cartas documentos, actas notariales, escrituras públicas, privadas, telegramas y cualquier otro medio, responder en igual sentido las que le sean remitidas o formuladas a

la parte poderdante.- Querellar criminalmente contra quien o quienes sean autores de actos delictivos que afecten la persona o bienes del mandante.- Interponer acción de amparo; y finalmente practicar cuantos más actos, gestiones y diligencias sean necesarios y conducentes al mejor desempeño del presente poder, haciendo constar que la intervención personal de su mandante no revoca ni limita el presente poder y solicitando a la autorizante expida Primera Copia para los apoderados.- **LEO** a los comparecientes, sin perjuicio de informarles del derecho que las leyes le acuerdan de leerla por sí, la otorgan y firman por ante mí, doy fe.- Tomás Francisco POMAR. Rodrigo Nicolás PEREIRA MOSQUERA. Matías Daniel OTERO. (Están sus firmas).- Está mi firma y mi sello: MARIA CECILIA DIFORTE.- **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mi al folio 836 del Registro Notarial 926 de mi adscripción.- Para LOS APODERADOS expido esta **Primera Copia** en tres sellos de Actuación Notarial números N 024314309, N 024314310 y el presente que sello y firmo en el lugar de su otorgamiento a tres dias de septiembre de dos mil diecinueve.-

MARIA CECILIA DIFORTE
MAT. 5336
ESCRIBANA

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

N 024314270

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1934987 **CUIT:**
ASOCIACION CIVIL
Razón Social :
OBSERVA DE DERECHO INFORMA ARGENTI- O.D.I.A. - ASOCIAC CIVIL
(antes):
Número de Trámite: 7966793
C.Trám. Descripción

00291 CONSTITUCION TRAM. PRECALIFICADO

Resolución Nª 97 Fecha de Resolución 28/02/2019

"OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMATICO ARGENTINO - O.D.I.A. - ASOCIACION CIVIL".-//

Escritura/s 464 - 36-

y/o instrumentos privados: -

Inscripto en este Registro bajo el numero: 213
del libro: 2 AC , tomo: -
de: ASOCIACIONES CIVILES

C.C.: 1 Buenos Aires, 07 de Marzo de 2019

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0846850

Gmail

Victor Castillejo <victorcastillejo21@gmail.com>

Reconocimiento Facial

Centro de Proteccion De Datos Personales <cpdp@defensoria.org.ar> 4 de abril de 2019, 16:36
Para: Victor Castillejo <victorcastillejo21@gmail.com>
Cc: Eduardo Peduto <epeduto@defensoria.org.ar>

Estimado Victor, mucho gusto. Le realizamos un punteo de lo realizado hasta el momento, el caso está aún en trámite. Si quiere copias debe realizar un pedido por la Ley Nro. 104, de allí pedimos al area respectiva que certifique y se las entregamos.

En el mes de enero del corriente a partir de información periodística dimos apertura a la actuación 2068/19 para recabar información y analizar el sistema de reconocimiento facial en esa oportunidad se mencionaba el reconocimiento vía "trenes y subtes".

Hasta el momento se enviaron notas a:

1- - Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Dr. Martin Cordini Juncos, Gerencia de Asuntos Jurídicos
2- - Secretaría de Transporte - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -Sr. Juan José Mendez
3- - Sr. Gerente de Asuntos Legales Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -SBASE- Dr. Diego Minetti
4- - Dirección Autónoma de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad - Policía de la Ciudad Sr. Roberto Bernardino Barbosa (este fue notificado a fin de marzo)
5- - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -Dr. Alejandro Ceccatto (Consultando sobre el funcionamiento del SIFACE)

En líneas generales se ha alertado por ser un medida intrusiva y preguntado sobre:

1 – Ratifique o rectifique la información que circulo en medios de comunicación
2- Informe acerca de los alcances de esta medida. En particular, detalle su fecha de implementación, en qué terminales o vagones de trenes o subterráneos será aplicada, días, horarios y cualquier otro dato de relevancia.
3- Informe si el área a su cargo tiene acceso al contenido de las cámaras ubicadas en las terminales o vagones de trenes o subterráneos.
4- Informe si el área a su cargo tiene acceso a los datos generados a través de la tecnología de reconocimiento facial, identifique quién lo tiene y si ello sucede de vía administrativa o en el marco de una causa judicial.
5- Informe de qué manera pondrá en conocimiento a los pasajeros del tratamiento de datos efectuado mediante la tecnología de reconocimiento facial.
6- Informe durante cuánto tiempo se guardan las grabaciones obtenidas, así como los datos producidos a través de la tecnología de reconocimiento facial y en qué ubicación física se encuentran resguardadas.
7- Detalle las medidas implementadas a fin de proteger el derecho a la privacidad y la intimidad de los pasajeros.
8- Informe si inició las medidas tendientes a efectivizar la inscripción de la Base de Datos correspondiente conforme al artículo 23 de la Ley 1845

Se recibieron respuestas de SBASE y CNRT informando que no poseen información sobre la cuestión y que no han intervenido en el tema (las adjuntamos).

A SBASE se remitió un segundo oficio el 15 de febrero de 2019 "... se resalta que la contestación recibida no contesta ninguno de los puntos, por lo que se reiteran los mismos. En función de lo expuesto, solicitados en el oficio anterior solicito tenga a bien arbitrar los medios conducentes a fin de remitir la información solicitada a continuación, así como cualquier otro dato que considere de interés para la prosecución de los presentes actuados".

Se encontraba a la firma un oficio dirigido al Secretario Secretaría de Seguridad Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Dr. Marcelo D´Alessandro el que será ampliado a partir de las noticias de ayer.

También tuvimos contacto con la Dra. M.M Panighetti (ex Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) y nos informaron que no había dictamen previo de dicha Agencia.

Además, vale aclara que el CPDP tiene otras actuaciones sobre temas de vigilancia mediante dispositivos electrónicos: 1- Videovigilancia (trámite n° 4528/13 y trámite n° 30656/17) 2- Cámaras de Detección de Patentes (trámites n° 3880/16 y 5598/16) 3- Sistema Aerostático de Vigilancia (trámite n° 24546/17).

Estamos a disposición.

Atte.

CPDP

De: "Victor Castillejo" <victorcastillejo21@gmail.com>
Para: cpdp@defensoria.org.ar
Enviados: Jueves, 4 de Abril 2019 9:57:07
Asunto: Reconocimiento Facial

[El texto citado está oculto]

---

3 adjuntos

Caratula 2068.pdf
84K

Rta SBASE.pdf
11271K

Repuesta CNRT.pdf
955K

INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO POR ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Señor Juez:

VICTOR ATILA CASTILLEJO ARIAS, abogado inscripto en el T° 133, F° 492 del C.P.A.C.F., en nombre y representación y en mi carácter de apoderado del **OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO**, con domicilio real en Camarones 4923, Dpto 4°, y constituyendo domicilio procesal en Victoria Ocampo 360, 3er Piso, Ofic. 335, en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me presento ante V.S. y digo:

1. PERSONERÍA

Conforme surge del poder general judicial que en copia se adjunta al presente como **Anexo I**, y que declaro bajo juramento que se encuentra vigente, soy apoderado del OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMÁTICO ARGENTINO, de ahora en más "O.D.I.A.", Asociación Civil debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia bajo el número 213, del libro 2AC de Asociaciones Civiles.

En consecuencia, solicito se me tenga por presentado en el carácter invocado, por parte y por constituido el domicilio indicado en el encabezado.

2. OBJETO

Que vengo por instrucciones de mi mandante a promover acción de amparo en los términos del art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 2145 y art. 12 de la ley 5784 (actual redacción de la ley 104) contra el Ministerio de Justicia y Seguridad (de ahora en más "MJYSGC") del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ("GCBA") con domicilio en la calle Av. Regimiento de Patricios 1142, de esta ciudad.

La acción se inicia en los términos de la normativa invocada y en mérito a las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente expondré, con el propósito de que V.S. tenga a bien condenar al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA a brindar en forma completa, veraz y adecuada la información de carácter público que

oportunamente solicitó mi mandante y, consecuentemente, de respuesta a la totalidad de las preguntas formuladas.

3. <u>LEGITIMIDAD</u>

La legitimidad para realizar pedidos de información se encuentra establecida en el Art. 1 de la Ley 104. Se establece en su parte pertinente que: "*Artículo l°.- Derecho de acceso a la información pública:* ***Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna****. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública* ***no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición****. […]*" (El destacado es nuestro)

Como notará V.S. la legitimidad prevista por la normativa es amplísima. Esto, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados antecedentes[1], por los tratados internacionales[2] y por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos[3].

A modo ilustrativo, tal criterio fue sostenido por el Superior Federal fijando un claro y preciso estándar en la materia, al sostener que "*...en materia de acceso a la información pública existe un importante consenso normativo jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un*

---

[1] Ver "Asociación Derechos Civiles c/EN-PAMI -(dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986", del 4 de diciembre de 2012 (Fallos, 335:2393); "CIPPEC c/EN-Ministerio de Desarrollo Social s/amparo", del 26 de marzo de 2014 (Fallos, 337:256); "Giustiniani, Rubén Héctor c/YPF SA s/amparo por mora", del 10 de noviembre de 2015 (Fallos, 338:1258) y "Garrido, Carlos Manuel c/EN-AFIP s/ amparo ley 16.986", del 21 de junio de 2016 (Fallos, 339:827)."

[2] La Convención Interamericana de Derechos Humanos prevé en su art. 13 la libertad de toda persona de "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Asimismo, el Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece una fórmula similar dando legitimidad a toda persona a solicitar cualquier tipo de información.

[3] Conocidísimo es el antecedente "Claude Reyes y otros vs. Chile" mediante el cual se estableció acerca del art. 13 de la Convención que "[…] dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla […]". Asimismo, "la divulgación de la información en poder del Estado debe jugar un rol muy importante en una sociedad democrática, pues habilita a la sociedad civil para controlar las acciones del gobierno a quien ha confiado la protección de sus intereses. "[E]l artículo 13 de la Convención debe comprender una obligación positiva de parte del Estado de brindar acceso a la información en su poder", lo cual es necesario para evitar abusos de los funcionarios gubernamentales, promover la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Estado y permitir un debate público sólido e informado para asegurar la garantía de contar con recursos efectivos contra tales abusos".

sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente_ ya que_ se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud. De poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal [_] El acceso a la información tiene como propósito coadyuvar a que los integrantes de la sociedad ejerzan eficazmente el derecho a saber, por lo que el otorgamiento de la información no puede depender de la acreditación de un interés legítimo en ésta ni de la exposición de los motivos por los que se la requiere" (Fallos: 339:827, considerando 40 y sus citas. En igual sentido: Fallos: 337:256, 1108 y 339:827, entre otros).

En la misma línea, la jurisprudencia de la justicia local es contundente en el reconocimiento de esta legitimidad amplia. Vale mencionar a título meramente ejemplificativo el fallo "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/Secretaría de Obras y Servicios Públicos s/amparo" de fecha 21 de noviembre del 2000.

En el mismo se estableció expresamente que la expresión "toda persona" del art. 1 transmite claramente esta idea de máxima amplitud. "*La locución empleada por el legislador en el art. 1º de la Ley de Acceso a la Información, en cuanto establece que la titularidad del derecho a obtenerla recae sobre 'toda persona', transmite claramente una idea de máxima amplitud, de voluntad de inclusión y no de exclusión. Luego, esa misma amplitud debe proyectarse a la legitimación para promover la acción de amparo que el mismo texto legal contempla en su art. 8º, parámetro interpretativo que se muestra decididamente contrario a la interpretación limitativa ensayada por la recurrente.*".

La claridad de estos presupuestos me exime de mayores consideraciones.

4. <u>ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN</u>

La acción de amparo que se promueve por medio de la presente es admisible en virtud del sistema legal previsto por la ley de la materia y además porque se encuentra expresamente previsto en la Ley de "Acceso a la Información Pública".

El art. 12 de la Ley 104 (conf. ley 5784) establece lo siguiente "Artículo 12.- Silencio. Denegatoria: *En caso que el/la peticionante considere que su solicitud de*

información no hubiere sido satisfecha o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, podrá considerarlo como negativa injustificada a brindar información, quedando habilitada la vía de reclamo prevista en la presente ley o la Acción de Amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."

Por el otro lado, la Ley de Amparo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2145 exige, en esencia, los siguientes requisitos para su procedencia: a) Que no exista otro medio judicial más idóneo; b) Que se interponga contra un acto u omisión de alguna autoridad pública o de algún particular; c) Que en forma actual o inminente se lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías previstos en el plexo normativo de la ciudad; y d) Que el amparo se interponga dentro de los 45 días hábiles contados a partir de que el afectado hubiese obtenido conocimiento cierto de la lesión, restricción, alteración o amenaza.

Como notará V.S. todos esos supuestos se encuentran cumplidos en el presente.

a) Medio judicial más idóneo.

En primer lugar, es la ley de acceso a la información pública la que prevé expresamente que la acción de amparo es la medida judicial idónea cuando nos encontramos ante un caso en el cual la autoridad pública a la cual se le ha solicitado información no la otorgue sin hacer manifestación alguna.

b) Se interponga contra un acto u omisión de alguna autoridad pública.

En este sentido, la nota nro. NO-2019-25581723-GCBA-DGEYTI, de fecha 15 de agosto de 2019, notificada con fecha 27/8/19, omitió dar respuesta a las preguntas presentadas y, consecuentemente incumplió en dar la información requerida mediante la solicitud de información pública presentada vía web por mi mandante y cuya copia adjuntamos al presente como **Anexo II**.

c) Lesión, restricción, alteración o amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, de derechos y garantías.

La Ley de Acceso a la Información prevé el derecho de cualquier persona a realizar solicitudes de información ante las autoridades públicas que posean esa información. También se establece que estas solicitudes deban ser respondidas de forma

completa, veraz, adecuada y oportuna. Al no contestar de manera completa y oportuna, el MJYSGC estaría violando derechos expresamente previstos en la normativa de esta ciudad.

En este sentido, el derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación, "*el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas*" (Fallos: 338:1258; también Fallos: 335:2393; 337:256, 1108; y CIDH, Caso "Claude Reyes y otros vs. Chile", sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, 151, párr. 92).

Como ha sido sostenido recientemente por los miembros de la CSJN en el caso "Savoia": "*Desde esa perspectiva, y con sustento en lo previsto por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha dicho que las restricciones a este derecho deben estar previa y claramente fijadas por una ley en sentido formal; responder a alguno de los objetivos permitidos por la Convención, esto es, "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas"; y ser "necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo". Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho" (conf. CIDH, Caso "Claude Reyes", antes citado, párrafos 89 a 91; en igual sentido ver Fallos: 338:1258, considerando 25, y 339:827, considerando 5°; ver también ley 27.275, artículo 1°, en cuanto establece que "los límites al derecho a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información*").(CSJ 315/2013, "Savoia, Claudio Martín c/ EN Secretaria Legal y Técnica (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986).

Estos principios también han sido incorporados expresamente a la ley 104 (conf. ley 5784) de Acceso a la Información (artículos 1° y 2°).

Los arts. 4, 5 y 7 de la citada ley imponen la obligación al GCBA de proveer la información requerida, y en caso de denegarla por alguno de los supuestos previstos en el art. 6, la denegatoria deberá estar fundada por imperativo del art. 13.

Como se acreditara en el apartado 5, el GCBA no solo omitió proveer parte de la información requerida, sino que tampoco fundó su denegatoria para cada una de las preguntas que quedaron sin responder, incumpliendo de manera palmaria con lo normado por el art. 13 de la LAI, lesionando en forma arbitraria el derecho de acceso a la información.

d) Plazo de interposición de la acción

Finalmente, cumplimos con el requisito sobre la temporalidad de la presentación ya que la Ciudad brindó su respuesta, que insistimos fue incompleta y obscura, en fecha 27 de agosto de 2019. En consecuencia, el plazo de 45 días hábiles comenzaría a computarse en el día hábil siguiente y a la presentación de este amparo el plazo no ha transcurrido. No obstante, señalamos que en el antecedente "Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" Expte. nº 5296 este plazo de 45 días ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia.

5. <u>ANTECEDENTES</u>

A. ¿Qué es O.D.I.A.?

El Observatorio de Derecho Informático Argentino es una Asociación Civil sin Fines de Lucro que nació con el propósito de llevar adelante acciones tendientes a motivar el adecuado ejercicio y promover la defensa de los Derechos Constitucionales de la ciudadanía que se deriven del uso de las nuevas tecnologías. Siempre buscando que el uso de estas nuevas tecnologías, y los derechos derivados de ese uso, sean utilizados en un marco de respeto hacia la democracia, los derechos humanos y el respeto a los diversos grupos sociales, culturales, religiosos y étnicos.

Asimismo, tiene entre sus asociados a profesionales del derecho y de la informática que ven con preocupación cómo la tecnología tiene cada vez más injerencia en la vida de las personas y ven como esto crea situaciones en donde se pone en peligro

los derechos de la sociedad civil. Situaciones que, como las que motivan esta presentación, ODIA intenta combatir.

B. El sistema de reconocimiento facial de prófugos.

En fecha 3 de abril de 2019, se realizó el "Primer Congreso Internacional de Delito Transnacional" que se llevó a cabo en la Legislatura Porteña. En dicha oportunidad, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, el Sr. Mtro. Diego Santilli anunció la implementación de un nuevo sistema de reconocimiento facial (de ahora en más "SRFP") que funcionaría también con "Inteligencia Artificial". Asimismo, el Sr. Mtro. manifestó que dicho sistema se encontraría operacional en algunas semanas posteriores.

Esto motivó ciertos reparos por parte de la ciudadanía[4], las asociaciones civiles[5] y demás organizaciones, e inclusive por la misma defensoría del pueblo quien le envió el mail que acompaño como **Anexo III** al suscripto. Todos ellos expresaron sus miedos a que con el uso de esta nueva tecnología se violara la privacidad de las personas.

No obstante, en fecha 25 de abril de 2019[6] con la publicación de la Resolución 398/2019[7] (de ahora en más "Resolución 398") de manera totalmente intempestiva, nos enteramos que este sistema de reconocimiento facial fue implementado.

La puesta en funcionamiento del SRFP fue totalmente sorpresiva.

Si uno analiza la aplicación de este tipo de sistemas en otras capitales del mundo observa que fueron precedidas de un amplio y fuerte debate por parte de la ciudadanía y las autoridades gubernamentales. Así se debatió acerca de la posible afectación de datos personales y si la implementación de cámaras de video vigilancia con sistemas de reconocimiento facial contribuye o ha contribuido a la mejora de la seguridad pública. Más allá que en algunos casos ha resulta justificable y en otros cuestionable, en aquellos países donde se terminó aplicando el sistema, la justificación del sistema, su legitimidad,

---

[4] https://www.infobae.com/opinion/2019/04/04/adios-a-la-privacidad-otra-vez-se-viene-el-sistema-de-reconocimiento-facial-en-las-calles/.

[5] https://www.vialibre.org.ar/2019/04/05/reconocimiento-facial-en-el-espacio-publico-repercusiones-de-los-anuncios-en-caba/

[6] https://www.lanacion.com.ar/seguridad/usaran-primera-vez-sistema-reconocimiento-facial-atrapar-nid2241360

[7] La misma la acompañamos como **Anexo IV.**

necesidad y proporcionalidad se estableció mediante una "evaluación del impacto en la privacidad" ("Privacy Impact Assessment").

La Evaluación de Impacto en la Privacidad (EIP) o Privacy Impact Assessment (PIA) en sus siglas inglesas, constituye una serie de métodos mediante los cuales se evalúan los riegos que un producto o servicio conlleva sobre la privacidad de los datos personales que maneja. Esta evaluación previa –que suele ser realizada por el propio gobierno para los casos de implementación de sistemas que operan en el espacio público con registros públicos - permite la correcta gestión de los riesgos antes de su aparición y la implantación de las medidas que permitan eliminarlos o mitigarlos.

Esta evaluación no fue realizada por el GCBA y, a la fecha, no es posible determinar el impacto y la posible afectación a los datos personales y otros derechos humanos básicos de los ciudadanos de la CABA, por parte del sistema implementado.

Por esta razón, desde ODIA presentamos nuestro pedido de información en fecha 4 de julio de 2019 el cual acompañamos como **Anexo V**.

C. La solicitud de información pública

Dicho pedido está compuesto por 77 preguntas. Las primeras 75 están destinadas a:

(i) conocer cierta información sobre el proceso mediante el cual se licitó el SRFP;
(ii) a conocer los antecedentes de la Resolución 398 mediante el cual se implementó el sistema;
(iii) a averiguar si el GCBA tenía los protocolos correctos de seguridad de la información;
(iv) conocer los resultados del uso del SRFP en estos primeros meses;
(v) conseguir copia de cierta documentación importante;
(vi) conocer los antecedentes administrativos previos a su implementación.

Por el otro lado, las últimas 2 preguntas (76 y 77) están destinadas algunas cuestiones puntuales acerca del "Pliego de Especificaciones Técnicas del Servicio de Análisis Integral de Video" (de ahora en más "el Pliego") mediante el cual el propio

gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expuso los requisitos técnicos que quería que el SRFP tuviera.

Como veremos en los párrafos siguiente y como notará V.S., todas las preguntas realizadas por nuestra parte están absolutamente autorizadas por la normativa y no entran dentro de las excepciones previstas en el art. 6 de la Ley 104.

Asimismo, una vez realizada la presentación a través del portal específicamente provisto por el GCBA para ello, nos enviaron los mensajes de correo electrónico que acompaño como **Anexo VI** y **VII**.

Mediante el primero, el GCBA nos hizo saber que dentro de las 48 horas hábiles se iba a estar verificando que nuestra solicitud correspondía efectivamente a un pedido de acceso a la información pública. Además, se nos hizo saber que el número de expediente de nuestro pedido pasaría a ser "00912237/19", que con la segunda respuesta pasaría a ser "GENERO EX-2019-21385378- -GCABA- DGSOCAI".

Mediante el segundo, se nos informó que nuestro pedido ya había sido analizado y que se determinó que el mismo correspondía efectivamente a una solicitud de acceso a la información en los términos de la Ley 104. En adición, se nos informó que el pedido de información sería respondido en un plazo de 15 días y se nos hizo la aclaración de que la respuesta podía ser prorrogada en un plazo de 10 días más.

En el mismo día de la recepción de este segundo correo, y con un claro intento de dilatar la respuesta, el MJYSGC nos remitió un correo electrónico con un aviso de prórroga con número IF-2019-21436604-DGTALMJYS y el cual dice textualmente "Se hará uso de la prorroga prevista en la Ley N° 104, al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 10 de la misma. Vencimiento 12/8"[8].

No obstante este claro interés dilatorio (que parece ser reiterado en todo pedido de información remitido al MJYSGC) mi parte esperó pacientemente al día en el cual vencía el plazo para que el Ministerio contestara nuestro pedido de información. Finalmente, llegó el día pero la respuesta nunca llegó.

Entenderá V.S. que la existencia de estos plazos están precisamente para respetarlos. No se puede permitir que la administración desnaturalice la existencia de

[8] Acompañado como **Anexo VIII.**

reglas expresamente previstas por una cuestión de "comodidad". Especialmente, cuando son derechos propios de la ciudadanía otorgados por una ley vigente.

Sin embargo, finalmente en fecha 27 de agosto de 2019, 15 días después de cuando debía ser contestadas y mientras mi parte ya estaba armando esta presentación, el MJYSGC respondió en forma incompleta, parcial y deficiente a nuestras preguntas.

D. La respuesta del MJYSGC.

Antes de analizar pormenorizadamente las omisiones en la contestación brindada por el MJYSGC, corresponde hacerle notar a V.S. que el tema objeto de esta acción es sumamente complejo y técnico. La sociedad civil organizada en asociaciones similares a ODIA hace enormes esfuerzos para controlar y contrarestar las acciones que podrían traducirse en una eventual o inminente afectación de derechos a gran escala por ser realizadas por parte del estado. Por ende, cuando estas asociaciones realizan pedidos de información a las entidades gubernamentales, estas deben ser contestadas con la suficiente seriedad y dedicación ya que de lo contrario, se debilitaría el sistema democrático y los principios republicanos que garantizan la publicidad de los actos de gobierno y el control por parte de los ciudadanos de dichos actos y la responsabilidad de los funcionarios por los actos que realizan en el marco de sus funciones.

Como dijimos anteriormente, la respuesta del MJYSGC fue recibida en el correo electrónico de mi mandante odiaasoc@gmail.com en fecha 27 de agosto de 2019, el mismo lo adjuntamos como **Anexo IX**. En dicho correo electrónico se adjuntaron 2 archivos PDF donde se encontraría la información solicitada por mi parte (**Anexo X** y **XI**).

El **Anexo X** parece ser una respuesta genérica mediante la cual el Ministerio intenta dar por satisfecho el pedido de información. El párrafo que más nos llamó fue el siguiente: "*Los considerandos del acto y el anexo operativo que lo acompaña (IF-2019-12925085-GCABA-MJYSGC también de carácter público) dan respuesta a la totalidad de los puntos que contiene el extenso cuestionario presentado, en todo aquello que corresponde a la competencia funcional de esta Secretaría de Justicia y Seguridad, en tanto sea calificable como "información pública" y no se dirija simplemente a inquirir sobre el giro ordinario de los asuntos de gestión, aspecto ajeno a tal concepto de conformidad con pacífica doctrina judicial y administr*ativa."

Desde ya negamos que dicha providencia pueda ser considerada como respuesta a la preguntas formuladas y sostenemos que únicamente la NOTA nro. NO-2019-25581723-GCBA-DGEYTI, debe ser el acto a revisar para determinar se ha sido satisfecho el pedido de acceso a la información.

Dicho esto, pasaremos a analizar la NOTA nro. NO-2019-25581723-GCBA-DGEYTI. Asimismo, hacemos la aclaración de que la Ley 104 no presupone la necesidad de que quien solicita la información tenga que explicar la razón por la cual solicita dicha información, pero, haremos referencia a algunas preguntas

D.1. Preguntas que damos por contestadas.

En primer lugar, a efectos de no extendernos más de la cuenta, damos por contestadas las preguntas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 43, 49, 55, 56 y 66.

D.2. Preguntas con respuestas parciales que no satisficieron el pedido de información.

Por el otro lado, hay un número de preguntas que, si bien se "contestaron" (en el sentido de que aparentan tener una respuesta), lo cierto es que o, no "contestaron" lo que se estaba preguntando o directamente omitieron información que hacía a la esencia de la pregunta que se estaba realizando.

Entenderá V.S., que el acceso a la información pública de manera completa, clara y veraz hace a la esencia de los derechos de la ciudadanía civil. Esta información le permite a la misma intentar mantener a raya los abusos que pueda llegar a realizar la administración y controlar que todos sus actos sean acordes a la normativa aplicable.

Por esta razón, la legislatura de la Ciudad ha promulgado la Ley 104 mediante la cual se establecieron principios que los organismos estatales deben respetar a efectos de cumplir con la manda de los ciudadanos de la ciudad. Entre esos principios se encuentran el de máxima premura; presunción de publicidad y accesibilidad; informalismo; no discriminación; eficiencia; completitud; disociación; transparencia; formatos abiertos; alcance limitado de las excepciones; in dubio pro petitor; buena fe y gratuidad[9].

[9] Art. 2 Ley 104 "Principios de Aplicación de la Ley".

No obstante lo anterior, y como veremos a continuación, el Ministerio se dedicó a empantanar, obscurecer, dificultar y directamente omitir la entrega de la información requerida por mi parte:

Preguntas Nº 15: El GCBA contestó: "Por una cuestión de seguridad informática no es posible brindar esa información". Lo cierto es que el art. 6 de la ley de Acceso a la Información **no prevé** a la "seguridad informática" como supuesto para eximirse de brindar la información requerida. Por otro lado, es de señalar el hecho de que, atento a los principios reseñados anteriormente, mal podría la administración exceptuarse del cumplimiento de sus obligaciones en relación al Derecho de Acceso de O.D.I.A. mediante la mera invocación de un principio abstracto.

Pregunta N° 21: Si bien se contesta que el software no reconoce menores de edad, lo cierto es que no explica de qué manera se llega a esa conclusión, ya que no solo lo solicita directamente en el Pliego sino también que la razón indicaría que para determinar esa respuesta, el software en algún momento debería reconocerlos.

Preguntas 22 y 23: el GCBA responde "N/A". ¿Acaso debemos inferir que se trata de la abreviatura de uso común en el inglés, utilizada para indicar que la información requerida no está disponible (not available)? Claramente la respuesta no cumple con lo normado por el art. 5 de la Ley de acceso a la información, que obliga al requerido a "informar los motivos por los cuales no la posee".

Pregunta 24: No indicó si efectivamente existía algún convenio.

Pregunta 44: El GCBA no explica que es un POC ni tampoco indica que tipo de aparato es utilizado. Se limita a establecer que es un "teléfono institucional" pero no indica que tipo de teléfono, marca, características, etc.

Pregunta 45: No indica que información es efectivamente remitidas a los agentes de la policía y tampoco explica que sistema es utilizado para la remisión de esa información. No explica a que se refiere con "APK".

Pregunta 59: El GCBA omite totalmente responder la pregunta.

Pregunta 60: El GCBA se limitó a manifestar que el índice de precisión era del 95% (y que desde ya negamos que eso sea así), sin establecer expresamente cuantos falsos positivos podía generar el SRFP.

Pregunta 61, 62 y 68 : El GCBA dice que la información estaría protegida por "copyright" y que por esa razón no tienen acceso. Esta información es totalmente indispensable a efectos de determinar la seguridad y/o confiabilidad del SRFP. Nuestra pregunta no está dirigida a determinar secretos comerciales ni derechos protegidos por la propiedad intelectual. Solicitamos en términos conceptuales se nos indique que método de detección de rostros se utiliza, sin especificar absolutamente nada más que el método. Por el otro lado, cuando nos referimos a el set de datos para entrenar el modelo nos referimos a las imágenes utilizadas para entrenarlo ya que si utilizaron imágenes de otros países con otras idiosincrasias, la probabilidad de que ocurran falsos positivos es mucho más alta. No obstante, adelantamos que si dudas hay acerca de la protección que se le debe dar a este sistema, VS podrá determinarlo por su propia cuenta.

Pregunta 63: La pregunta estaba dirigida a averiguar a que porcentaje de confiabilidad en una coincidencia se había comprometido la empresa y además a que indicara que porcentaje de efectividad se ha comprometido.

Pregunta 65: Se utilizan términos como SLA que mi parte desconoce. Además insinúa que hay otros procesos de control que no nos ha mencionado.

Pregunta 67: La pregunta estaba dirigida ha si ya se había hecho una auditoría del software. El GCBA se limita a decir que la autoridad encargada de esa auditoría era la defensoría del pueblo.

Preguntas Nº 76 y 77: el GCBA se limitó a pegar un link al pliego de las bases y condiciones para la contratación del SRFP que mi parte ya ha analizado exhaustivamente y que motivaron expresamente las preguntas realizadas. Adjuntamos para la consideración de V.S. el pliego de bases y condiciones como **Anexo XI.**

La contestación del GCBA se limitó a alegar "seguridad informática" (respuesta a pregunta Nº 15) y a "pegar" un link (respuestas a preguntas Nº 76 y 77), sin aportar mayores precisiones al respecto, y sin siquiera mencionar qué norma jurídica daba sustento suficiente al GCBA para clasificarlos de esa manera o entender que resultaba una respuesta satisfactoria y suficiente y, por ende, determinar que esa información fuera sustraída del acceso irrestricto de la ciudadanía.

En tales condiciones, resulta aquí aplicable la rigurosa expresión afirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso que guarda suficiente analogía con el

presente, de que: "Convalidar, sin más, una respuesta de esa vaguedad significaría dejar librada la garantía del acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar" (Fallos: 338:1258, considerando 27).

D. 3. Preguntas no contestadas, cuya omisión no fue justificada ni fundada.

A continuación, enumeramos las preguntas que no fueron contestadas y explicamos la importancia de contar con la información requerida:

Pregunta Nº 10: la información solicitada es necesaria a los fines de poder determinar si ha existido o existe una Evaluación de Impacto en la Privacidad (EIP) respecto del sistema de reconocimiento facial.

Pregunta Nº 13: No se respondió acerca de qué manera es realizada la auditoria del borrado de las imágenes, ni tampoco cuál es la técnica de borrado utilizada.

Preguntas Nº 16 y 17: No fue contestado para cuáles otras tareas puede ser utilizado el SRFP, cuando supuestamente, el único objetivo del sistema era la detección de prófugos.

Preguntas Nº 18, 19 y 20: La información requerida resulta necesaria para evaluar la seguridad del sistema.

Preguntas Nº 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, y 36: la información solicitada es necesaria a los fines de poder determinar si ha existido o existe una Evaluación de Impacto en la Privacidad (EIP), si se puede determinar si se protegerá adecuadamente la información acumulada por este SRFP, entre otras cuestiones.

Preguntas Nº 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47 y 48: La información requerida resulta necesaria a los fines de evaluar el uso de los resultados del sistema por parte de la autoridad de prevención y asimismo determinar si existen protocolos de actuación por parte de las fuerzas de seguridad en casos de “falsos positivos”.

Preguntas Nº 50 y 51: a los fines de evaluar la “performance” del sistema resulta imperioso saber el número de aciertos (personas detenidas por pedidos de detención vigente) y el número de “falsos positivos”.

Preguntas Nº 52 y 53: Conforme lo expuso el Relatos de las Naciones Unidas en el documento ofrecido como prueba, contar con una definición de “delito grave” a los fines de ser utilizado como criterio delimitar resulta imperioso a los fines de determinar el universo de personas que conforman la lista/registro que posee el sistema.

Preguntas Nº 54, 57 y 58: la información requerida es necesaria a los fines de conocer la empresa que obtuvo la licitación y si existe un protocolo que proteja la información sensible de las personas que figuran en la lista, en caso de que la firme deje de existir. Asimismo, se necesita a efectos de evaluar la posible ocurrencia de hechos contrarios a lo dispuesto por le Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad.

Pregunta Nº 64: Es necesario conocer si existe un control por parte de la Ciudad, acerca de los compromisos asumido por la empresa.

Requisitorias Nº 25, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75: no fueron contestadas ni enviados los documentos solicitados, ni justificada dicha omisión.

El hecho de que el GCABA haya omitido dar respuesta sin siquiera haber justificado tal omisión constituye una palmaria afectación al derecho de todo ciudadano de acceder a la información pública, máxime cuando se tiene en consideración que la información requerida se vincula a un sistema cuya aplicación puede afectar y vulnerar a gran escala, derechos de entidad constitucional.

Reste señalar que, la carga de la prueba de la legitimidad de la restricción corresponde al Estado (conf. CIDH, Caso "Claude Reyes", antes citado, párrafo 93), y que cuando se deniega una solicitud de información debe hacerse mediante una decisión escrita, debidamente fundamentada, que permita conocer cuáles son los motivos y normas en que se basa para no entregar la información en el caso concreto (Fallos: 335:2393, considerando 9 °; y 338:1258, considerando 7°; también CIDH, Caso "Claude Reyes", párrs. 77 y 158).

El silencio no es una opción para el Estado.

En otras palabras, "*[...] los sujetos obligados solo pueden rechazar un requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido. De esta forma, se evita que por vía de genéricas e*

imprecisas afirmaciones, pueda afectarse el ejercicio del derecho y se obstaculice la divulgación de información de interés público" (Fallos: 338:1258, considerando 26. A nivel legislativo ver artículos 1, 2, 8 y 13 de la ley 27.275).

6. <u>SOLICITA EN SUBSIDIO</u>

Por último, de considerar que los argumentos ofrecidos en los apartados anteriores no son suficientes para ordenar la entrega de la información solicitada sin más, requerimos en forma subsidiaria, que V.S pida acceder a la documentación requerida para verificar que la clasificación de la misma realizada por el GCABA haya sido realizada de acuerdo a parámetros legítimos fijados por la ley, es decir, si fue legítimamente clasificada porque "*la divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo de seguridad pública*" (conforme estipula el inc. e de la ley 5784).

Es que, sin esta instancia judicial de revisión, el régimen de excepciones al acceso a la información se convertiría en un mecanismo mediante el cual el Poder Ejecutivo puede conculcar un derecho constitucional mediante la simple invocación del mismo.

7. <u>PLANTEA CASO FEDERAL</u>

Se formula expreso planteo del caso federal para el supuesto improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la acción deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones del artículo 14 de la Ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación.

8. <u>PRUEBA</u>

Ofrezco como prueba del derecho de mi parte la siguiente:

<u>Documental</u>:

1) Anexo I: Copia de Poder General Judicial.
2) Anexo II: Copia de la Nota número "NO-2019-25581723-GCBA-DGEYTI"
3) Anexo III: Copia del correo electrónico de la Defensoría del Pueblo dirigido al suscripto.
4) Anexo IV: Copia de la Resolución 398/2019

5) Anexo V: Copia del Pedido de Información Pública presentado por O.D.I.A. ante el GCBA.
6) Anexo VI: Copia de correo electrónico del GCBA mediante el cual se nos notificó que nuestro pedido de información iba a ser evaluado.
7) Anexo VII: Copia de correo electrónico del GCBA mediante el cual se nos notificó que nuestro pedido era efectivamente un pedido de acceso a la información pública.
8) Anexo VIII: Copia de correo electrónico del GCBA mediante el cual nos notificaron la prórroga.
9) Anexo IX: Copia de correo electrónico del GCBA del 27 de agosto mediante el cual remitieron la "respuesta".
10) Anexo X: Respuesta Genérica por parte del GCBA.
11) Anexo XI: Pliego de Contratación Directa.

Informativa:

En el supuesto e hipotético caso que la parte demandada no reconozca los hechos expuestos y descriptos anteriormente, y que desconozca la documental acompañada solicito se libre oficio al GCBA y/o al Ministerio y/o entidad correspondiente a efectos de que:

1) Se remita el Expediente N° 2019-21385378-GCABA-DGSOCAI de donde debería surgir el expediente que dio respuesta a nuestro pedido de información.
2) Se remita copia del expediente 00912237/19 mediante el cual el DGSOCAI habría evaluado nuestro pedido de información.

9. AUTORIZA

Solicito se autorice a los Dres. Matías Daniel Otero y/o Agustín Malpede y/o Marina Flego Eiras y/o Manuel Ignacio Brizuela y/o Martin Pablo Silva Valent y/o quienes estos designen, a examinar el expediente, retirar copias, diligenciar cédulas, oficios, etc., en definitiva a realizar todas las actuaciones necesarias para el mejor desarrollo de la presente causa.

10. PETITORIO

Por lo expuesto anteriormente le solicito a V.S. que:

1) Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.
2) Se tenga presente la prueba ofrecida.
3) Se tenga por planteado el caso federal
4) Oportunamente se dicte sentencia favorable a mi parte con expresa imposición de costas a la parte contraria.

Proveer de conformidad que,

SERÁ JUSTICIA

victorcastillejo@hotmail.com

From: Observatorio ODIA <odiaasoc@gmail.com>
Sent: 23 September 2019 17:27
To: vcastillejo@ajlaw.com.br
Subject: Fwd: Tu solicitud de información fue aprobada

---------- Forwarded message ---------
From: **Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires** <ba147@buenosaires.gob.ar>
Date: Thu, Jul 4, 2019 at 1:30 PM
Subject: Tu solicitud de información fue aprobada
To: <odiaasoc@gmail.com>

Hola **Victor**,

Te contamos que tu solicitud de **Acceso a la información pública (00912237/19)** ya fue analizada.

El personal de la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información determinó que el pedido corresponde a una solicitud de acceso a la información (Ley 104).

Tu pedido será respondido en un plazo de 15 días hábiles, pudiendo extenderse por 10 días adicionales. Tu solicitud, y número de expediente es:

Por la presente se adjunta pedido de información del Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) sobre reconocimiento facial. Asimismo se solicita un correo electrónico para enviar el estatuto constitutivo ya que el tamaño del archivo es muy grande para subir por aquí . GENERO EX-2019-21385378- -GCABA-DGSOCAI

Podés consultar sobre el estado, contactándote con la DGSOCAI.

¡Muchas gracias!

Dirección General Seguimiento de Organismos
de Control y Acceso a la Información
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos
dgsocai@buenosaires.gob.ar
(+54 11) 5091-7301/7299
Uspallata 3160, CABA

Información de contacto: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Uspallata 3160 - C1437JCL, CABA, Argentina.
Ley de Protección de datos de la CABA. Ley 1845 Titulo IV art.13 inc. B) El titular tiene Derecho de acceso, previa acreditación de su identidad, a solicitar y obtener información relativa a los datos personales referidos a su persona que se encuentren incluidos en los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.Inc C) Tiene Derecho de rectificación, actualización o supresión de sus datos.

Enviado por la *Dirección General de Atención y Cercanía Ciudadana*
vía *Dirección General de Comunicación Directa* | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

victorcastillejo@hotmail.com

From: Observatorio ODIA <odiaasoc@gmail.com>
Sent: 23 September 2019 17:29
To: vcastillejo@ajlaw.com.br
Subject: Fwd: Aviso de Prorroga EX-2019- 21385378-GCABA-DGSOCAI
Attachments: IF-2019-21436604-GCABA-DGTALMJYS.pdf

---------- Forwarded message ---------
From: **Antonio Santana** <asantana@buenosaires.gob.ar>
Date: Thu, Jul 4, 2019 at 4:08 PM
Subject: Aviso de Prorroga EX-2019- 21385378-GCABA-DGSOCAI
To: odiaasoc@gmail.com <odiaasoc@gmail.com>
Cc: Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información <dgsocai@buenosaires.gob.ar>

Me dirijo a Usted a fin de hacerle saber que se hará uso de la prórroga prevista en la Ley N° 104, al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 10 de la misma, a fin de poder contar con la totalidad de la información requerida y dar cabal respuesta a la solicitud presentada,

Así mismo le informo que se adjunta al presente el IF-2019-21436604-DGTALMJYS por el cual se solicita la prorroga

Gracias

Antonio Santana
Gabinete Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
Ministerio de Justicia y Seguridad - Gobierno de la Ciudad de Buenos aires.
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 3er piso /4323-8929

Vamos Buenos Aires

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Informe

Número: IF-2019-21436604-GCABA-DGTALMJYS

Buenos Aires, Jueves 4 de Julio de 2019

Referencia: Solicitud de Prórroga EX-2019- 21385378-GCABA-DGSOCAI

Se hará uso de la prorroga prevista en la Ley N° 104, al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 10 de la misma. Vencimiento 12/8

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.07.04 15:52:58 -03'00'

MARIA LAURA ALFONSO
Director General
D.G. TEC. ADM Y LEGAL MJYSGC
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.07.04 15:52:59 -03'00'

Gmail

Victor Castillejo <victorcastillejo21@gmail.com>

Fwd: Respuesta al requirente de EX-2019-21385378-GCABA-DGSOCAI

Observatorio ODIA <odiaasoc@gmail.com> 22 de diciembre de 2020, 22:00
Para: Rodrigo Iglesias <rodryiglesias@gmail.com>, victorcastillejo21@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
From: **Liliana Singer** <lsinger@buenosaires.gob.ar>
Date: Tue, Aug 27, 2019 at 2:25 PM
Subject: Respuesta al requirente de EX-2019-21385378-GCABA-DGSOCAI
To: odiaasoc@gmail.com <odiaasoc@gmail.com>
Cc: Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información <dgsocai@buenosaires.gob.ar>

Me dirijo a usted atento al expediente de la referencia , en relación a su requerimiento, se le hace saber que la información ha sido producida mediante PV-2019-25206812-GCABA-SECJS y NO-2019-25581723-GCABA-DGEYTI, las cuales se adjuntan al presente.

Saludos atte.

Lic.Liliana Singer

Gabinete Dirección General Técnica Administraiva y Legal

Ministerio de Justicia y Seguridad

2 adjuntos

PV-2019-25206812-GCABA-SECJS.pdf
81K

NO-2019-25581723-GCABA-DGEYTI.pdf
111K

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Providencia

Número: PV-2019-25206812-GCABA-SECJS

Buenos Aires, Martes 13 de Agosto de 2019

Referencia: EX-2019-21385378

Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias

Se toma conocimiento de la solicitud de acceso a la información pública obrante en orden 2 (RE-2019-10516872-GCABA-MGEYA).

En función del deber de informar que emerge de la Ley N° 104 (texto consolidado por Ley N° 6017), corresponde hacer saber al peticionante que esta cartera ministerial implementó en fecha próxima el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (`[SRFP] cfr. Resolución N° 398/MJYS/2019 del 24 de abril del corriente año; BO CABA N° 5604, ed. del 25/4/19, la cual es accesible a través del link: https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativa [cfr. art. 5°, 2° párr. del Anexo I del Decreto N° 260/GCABA/17]).

Los considerandos del acto y el anexo operativo que lo acompaña (IF-2019-12925085-GCABA-MJYSGC también de carácter público) dan respuesta a la totalidad de los puntos que contiene el extenso cuestionario presentado, en todo aquello que corresponde a la competencia funcional de esta Secretaría de Justicia y Seguridad, en tanto sea calificable como "información pública" y no se dirija simplemente a inquirir sobre el giro ordinario de los asuntos de gestión, aspecto ajeno a tal concepto de conformidad con pacífica doctrina judicial y administrativa.

En esa dirección, se considera importante aclarar en especial las siguientes cuestiones. El SRFP opera básicamente con los registros que están incorporados en la base de datos del CONARC y, de forma excepcional, se integra también con los requerimientos judiciales específicos de identificación de personas. Estas últimas solicitudes deben dirigirse de forma directa a esta cartera ministerial desde donde se las remite a la Policía de la Ciudad. Por fuera de estas dos fuentes no se incorporan otras imágenes al SRFP. Por lo general, el Poder Judicial solicita, en el marco de investigaciones a su cargo, el cotejo de imágenes con los registros incorporados en la base del CONARC.

El tratamiento de la información que se genera a través del SRFP se enmarca en lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 5.688) y en los regímenes nacionales y locales específicos, sujeto al régimen de penalidades en vigencia. La totalidad del personal que presta servicio en el Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad suscribe el pertinente convenio de confidencialidad.

Tal como ha sido dispuesto en el Anexo de la Res. 398/19 cit. (en esp. art. 7°), la alerta que genera el SRFP recibe un tratamiento idéntico al de una llamada al servicio de emergencias policiales. La atención de tales situaciones se rige por estándares internacionales que fijan criterios generales y uniformes de actuación del operador policial. Por regla, tales protocolos son para uso reservado de los miembros de la fuerza de

seguridad. Desde el CMU se envía el alerta al personal policial destacado en el lugar, quien procede a la identificación de la persona y realiza la consulta de forma inmediata al tribunal que dispuso la orden.

Las restantes cuestiones deberán evacuarse con las áreas competentes, para lo cual se giran las actuaciones a la Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias, a sus efectos.

Sin otro particular, saluda a ud. atte.-

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.08.13 13:28:50 -03'00'

MARCELO SILVIO DALESSANDRO
Secretario
SECRETARIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.08.13 13:28:50 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Número: NO-2019-25581723-GCABA-DGEYTI

Buenos Aires, Jueves 15 de Agosto de 2019

Referencia: s/ URGENTE Y PREFERENCIAL DESPACHO - LEY 104 - Expediente N° 2019-21385378- GCABA-DGSOCAI

En respuesta a: NO-2019-25526527-GCABA-DGALSE

A: Fabiana Costanza (DGALSE), Gustavo Roldan (DGEYTI),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al requerimiento efectuado a través de la Ley 104 “Acceso a la Información”, en el marco de la cual se solicita, la información que a continuación se detalla y esta dentro del marco de mi competencia:

1) ¿Cuántas cámaras de monitoreo posee la CABA?

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) cuenta con un total de 7.970 cámaras de video vigilancia (6.544 instaladas en superficie - espacio público, 739 en Subterráneo y 687 de proceso de integración con AUSA, SBASE, Tránsito, Anillo Digital, etc.).

2) ¿Cuántas de ellas están habilitadas para utilizar este “Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos”?

La totalidad de las cámaras correspondientes al MJyS poseen la tecnología necesaria para la implementación de licencias de reconocimiento facial.

3) ¿Cuál es la ubicación exacta de aquellas cámaras que estarán utilizando este nuevo “Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos”?

Las ubicaciones de uso e implementación de las licencias de referencia se prestablecen conforme a los requerimientos de seguridad y operatividad policial.

4) ¿En qué resolución de video capturan las imágenes estas cámaras?

Resolución 4k

5) ¿Dónde se encuentra ubicado el Centro de Monitoreo Urbano (de ahora en más “CMU”) que haría el procesamiento de las imágenes?

Av. Guzmán 396, Chacarita, CABA (Comuna 15).

6) ¿Cuál fue el costo de la construcción de la infraestructura necesaria para transmitir dichos videos al CMU?

La infraestructura utilizada para la transmisión de imágenes de video al CMU es la ya implementada para el Plan Integral de Videovigilancia. Por lo que no se detentan costos de arquitectura técnica adicionales para la transmisión de imágenes de las ya existentes.

7) ¿Qué formato de video se utiliza para la captura de las imágenes? ¿son las imágenes sometidas a compresión? ¿Qué método de compresión y descompresión es utilizada? ¿Qué ancho de banda es necesario para la transmisión de las imágenes desde cada cámara al CMU?

El formato es Mpeg-4. Las imágenes son sometidas a un proceso de compresión, cuyo método es H.264/H.265. El ancho de banda utilizado para la transmisión de imágenes de video de licencias de reconocimiento facial es de hasta 8 megas.

8) ¿Se utiliza algún sistema de cifrado para la transmisión de la información desde la captura realizada por las Cámaras hasta el CMU? De ser así, ¿qué sistema de cifrado es utilizado?

El cifrado es Ipsec.

9) ¿Qué tipo de infraestructura tuvo que ser implementada para la realización de dicho procesamiento y para la transmisión de las imágenes?

Se puso en funcionamiento una granja de servidores para procesamiento de imágenes.

11) ¿De qué manera se procesan las imágenes que son capturadas por las cámaras?

Se efectúa una comparación de la imagen capturada por la cámara con la imagen que la persona que figura en la lista del CONARC posee en el RENAPERE

12) ¿Durante cuánto tiempo son almacenadas las imágenes capturadas por las cámaras y que son procesadas a través del “Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos”?

Las imágenes capturadas por el Sistema de Reconocimiento Facial no son almacenadas, excepto las de alertas positivas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 484 de la Ley Nº 5.688/16 (B.O. Nº 5030 de fecha 21/12/2016) y Decreto reglamentario Nº 312-MJYSGC/18 (B.O. N° 5464 de fecha 25/9/2018

13)¿Qué técnica de borrado es utilizada? ¿Cómo se audita y de qué manera se asegura que las imágenes son efectivamente eliminadas?

La auditoría del funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos es llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

14)¿Dónde se realiza físicamente el emparejamiento o la coincidencia de los puntos de los rostros capturados por las cámaras con los puntos de los rostros capturados de la base de datos utilizada para realizar dicho procesamiento?

En DataCenter del MJyS.

15) Una vez que las imágenes llegan al CMU, ¿cómo se cifra dicha información en el disco y en la memoria RAM? De no ser realizado este cifrado, ¿Qué medidas de seguridad, privacidad y confidencialidad son utilizadas para asegurar su control e integridad?

Por una cuestión de seguridad informática, no es posible brindar esta información.

21) Informe si el software reconoce a menores de edad

NO.

22) ¿Qué información se registra y archiva acerca de ellos?

N/A

23) ¿Con quién se comparte dicha información y con qué fines?

N/A

24) ¿Existe algún convenio realizado entre el CONARC y el RENAPER para la transmisión de los datos biométricos?

Con en el RENAPER, la base del CONARC es publica https://servicios.dnrec.jus.gov.ar/CONARCPublico/

43) Una vez realizada la detención y cumplida la orden judicial de captura, ¿En qué momento se destruyen los datos y archivos generados por el sistema?

Cuando se produce una detención dando cumplimiento a la orden judicial de captura, las imágenes se ponen a disposición de la justicia si es que son requeridas, caso contrario el sistema las destruye de forma automática en el plazo de 60 días corridos desde su captación.

44) ¿En qué tipo de aparatos reciben las alertas generadas por el sistema los agentes de la Policía?

Teléfono institucional (POC) –

¿En qué momentos los agentes destruyen aquellos archivos que le fueron enviados a esos aparatos?

Los POC no almacenan eventos

45) ¿A través de qué sistema les llegan las alertas generada a los Policías? ¿Qué información les son remitidas?

A través de una APK especifica de desarrollo propio. Información respecto a la captura de la persona proporcionada por el CONARC.

49) ¿Cuántas alertas ha disparado el sistema desde su implementación y puesta en funcionamiento?

Alertas arrojadas 3059.

55) ¿Cuánto tiempo se tuvo para la instalación de este nuevo sistema de reconocimiento facial?

El proceso de instalación del sistema de reconocimiento facial de prófugos y puesta a punto del mismo fue de 4 meses (incluye periodo de testing).

56) ¿Hubo período de prueba antes de la puesta en funcionamiento de este sistema? ¿cuándo se ha firmado el acta de entrega definitiva de obra correspondiente a la contratación de todo sistema informático?

Si, se realizaron pruebas sobre muestras testigos seleccionadas para tal fin. El acta de entrega definitiva del sistema se realizó el 23/04.

59) Ante una vulnerabilidad del sistema de Reconocimiento Facial o un ataque informático donde se expongan los datos y/o archivos de los ciudadanos generados por este sistema ¿Existe un sistema de crisis que incluya notificar a los ciudadanos de esta exposición?

El DataCenter del Ministerio es de características TIER II, los datos de las personas son de prófugos de la justicia, información suministrada por el CONARC

60) ¿Qué compromiso tuvo la empresa respecto a la cantidad posible de falsos positivos que su sistema podía generar?

El índice de precisión en superior al 95% conforme a lo enunciado en el pliego técnico del oferente.

61) ¿Qué método de detección de rostros se utilizó? En caso de utilizar redes neuronales, ¿qué modelo/arquitectura se utilizó y cuál fue el set de datos que se utilizó para entrenar el modelo?

Esta información corresponde al desarrollo del producto y es un detalle que posee el copyright de la licencia del mismo, por lo cual no se posee acceso a esta información.

62) ¿Qué datasets fueron utilizados para ese entrenamiento y que organismo fue responsable?

Ver respuesta 61.

63) ¿A qué porcentaje de confiabilidad en una coincidencia se ha comprometido la empresa? ¿A qué porcentaje de efectividad respecto del sistema completo se ha comprometido la empresa?

El porcentaje es +78 % (según manual de uso), hoy calibrado en + 80 %.

65) ¿Qué seguimiento y control respecto de los compromisos asumidos por la empresa se llevarán a cabo?

El proceso de control y seguimiento contempla: análisis detallado de los falsos positivos para que los mismos se encuentre dentro de los parámetros ofertados, disponibilidad del servicio, proceso de instalaciones y calibración de cámaras, auditoria de base de datos de prófugos, gerenciamiento de la infraestructura física del sistema, análisis de SLA ante fallas del sistema, etc.

66) ¿Existe alguna instancia, en cualquier parte de todo el sistema (software o hardware), en el que el resultado de uno o más procesos del mismo sea utilizado como retroalimentación o input para entrenar o modificar el mecanismo de reconocimiento facial de cualquier forma?

No.

67) ¿Se ha hecho una auditoría del software por un tercero independiente?

Conforme la Resolución 398/2019, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el organismo auditor

68) Se solicita se nos brinde el código fuente del software en soporte digital y enviado al correo electrónico que se señala en el encabezado.

Ver respuesta 61.

74) Copia del convenio realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el CONARC para el envío de las imágenes, archivos, e informaciones correspondientes y relacionadas a este Sistema de Reconocimiento Facial.

Ver pregunta 24

76) "[...] Dicho servicio tendrá como objetivo el análisis integral en tiempo real sobre imágenes de video en vivo para la detección facial de personas buscadas basada en bases de datos de imágenes de rostros y de análisis integral de video para la detección de diferentes patrones de comportamiento y cambios de condiciones ambientales. El servicio será prestado sobre todas las cámaras de video vigilancia que técnicamente lo permitan, como así también a las imágenes almacenadas en los sistemas de resguardo de imágenes, al momento de la presentación de su oferta. […]" "[...] Las imágenes captadas que generen algún tipo de alerta como toda la información vinculada a la misma, deberán ser guardada de forma encriptada para futuros análisis […]" "[…] Contar con una base de datos fotográfica de hasta cien mil (100.000) rostros para su posterior identificación formando una lista negra de personas buscadas. […]"(El destacado es nuestro).

a. ¿Qué se quiso decir con "detección de diferentes patrones de comportamiento"?

b. ¿Qué se quiso decir con "cambios de condiciones ambientales"?

c. ¿Cuál es la cantidad de cámaras instaladas en la vía pública pertenecientes al gobierno de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y de la Policía de la Ciudad?

d. ¿Qué cantidad de esas cámaras permiten utilizar el software de reconocimiento facial?

e. ¿Qué tipo de encriptación se utiliza para el almacenamiento de esas imágenes que generen alertas?

f. ¿En qué consisten esos "futuros análisis" que se mencionan?

g. ¿Durante cuánto tiempo se guardarán dichas imágenes?

h. ¿Dónde se encuentran físicamente los servidores donde se almacena la información del registro resultante entre la inclusión de la base de datos de la CONARC con la del RENAPER, y la información de la estructura facial del rostro capturado por las cámaras instaladas en la vía pública de la Ciudad?

i. ¿Qué protocolos de seguridad son utilizados para el almacenamiento de la información del registro resultante entre la base de datos de la CONARC y el RENAPER, y

lo grabado por las cámaras instaladas en la vía pública de la Ciudad?

j. ¿Quién realiza esta llamada “lista negra”?

k. ¿Como y que procedimiento se utiliza para la confección de la llamada “lista negra”?

l. ¿Cuántas personas hay en esta lista?

m. ¿Cuál es el criterio que se sigue para ingresar y/o egresar de esta lista?

n. ¿Quién tiene permiso para modificar esta lista? ¿Qué parámetros o requisitos pide el sistema a efectos de modificar la lista?

https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhyvzUss83|5qmQHYdlWCoEzPIKU0JAvRZ7kltC74K|7Tw11ctBR9dfFZZZemaLoi969Lwy2BFPNowVGFQ7XOHCTEKW51rAObRlXsdfYAs0SFw==

77) “[…] Ante eventos repetitivos, el sistema deberá enmascarar automáticamente dichos eventos a modo de optimizar la visualización de los operadores y proveer de información de notificaciones eficientemente. […]” “[…] El sistema deberá considerar áreas de enmascaramiento tanto dentro como fuera de la zona de detección para así evitar falsos positivos. […]” “[…] El sistema deberá tener una historia de los eventos con toda la información necesaria para su comprensión: imagen y posibilidad de reproducción de la grabación alrededor del tiempo en que el evento ocurrió. […]” “[…] El sistema deberá tener la capacidad de purga periódica de datos acumulados, considerando su antigüedad. […]” “[…] El sistema deberá considerar dos (2) niveles de permisos: uno limitado a la visualización de datos y otro con disponibilidad para todas las operaciones. […]” “[…] El sistema no deberá superar la detección de falsos positivos en un 15% del total de los eventos detectados. […]” “[…] Persona que cruza una línea […]” “[…] Persona moviéndose en un área: ante la detección de una persona en una zona estéril definida previamente. […]” “[…] Hacinamiento: alerta por la detección de una cierta cantidad de personas detectadas durante una cierta cantidad de tiempo. […]” “[…] Acercamiento entre personas: alerta ante la detección de un cruce de línea de una segunda persona en un tiempo menor al definido en la regla. […]” “[…] Merodeo: alerta por personas residiendo en una zona durante un tiempo mínimo definido y comportándose de una manera sospechosa que respalde la credibilidad de que su objetivo es una actividad delictiva. […]” “[…] Ocupación: alerta ante la detección de un límite de personas definidas para un área. […]” “[…] El sistema deberá permitir configurar una tolerancia sobre las búsquedas, permitiendo y aceptando posibles falsos positivos para la obtención de información. […]” “[…] A su vez, deberá permitir la detección de la emoción del rostro (feliz, sorprendido, neutral, triste, miedo, enojo y disgusto). […]” “[…] Deberá permitir la indexación masiva de datos de video, registrando la información de todas las personas que aparecen, permitiendo una búsqueda dinámica y veloz de las personas de interés. […]” (El destacado es nuestro).

a. ¿Qué se considera como un “evento repetitivo” y qué criterios se utilizan para definirlo?

b. ¿En qué consiste un “Área de Enmascaramiento” y como puede su consideración evitar “falsos positivos”?

c. ¿A qué se refiere con “zonas de detección”? ¿Cuáles son estas zonas?

d. ¿A qué se refiere con historia de los eventos? ¿Qué información se almacena? ¿Dónde es almacenada esta información? ¿Quién tiene acceso a esa información y por cuánto tiempo?.

e. ¿Qué información se considera como “purgable”? ¿Dónde se almacena esa información? ¿Cuáles son los plazos máximos y mínimos que se consideran a efectos de realizar esa purga?

f. ¿Cuántos usuarios con los dos distintos permisos existen? ¿Qué cantidad de usuarios están limitados a la visualización de los datos? ¿Cuántos usuarios existen con total disponibilidad para todas las operaciones? ¿Quién otorga estos permisos? ¿De qué manera y con qué criterio se otorgan esos permisos?

g. ¿Cuáles son la totalidad de las operaciones?

h. ¿Qué criterio se utilizó a efectos de considerar que un 15% de falsos positivos era un porcentaje aceptable?

i. ¿Quién determina las líneas virtuales mencionadas, y dónde se encuentran dichas líneas?

j. ¿A qué se refiere con “zona estéril”?

k. ¿Cuál es la cantidad (mínima) de personas y durante cuánto tiempo (mínimo) es necesario para que este se considere como hacinamiento?

l. ¿En qué condiciones puede suceder un cruce de línea que implique un “acercamiento entre personas”? ¿Cuál es la utilidad práctica de esta categoría?

m. ¿Cuánta es la cantidad mínima de personas necesarias para que se dé un caso de “merodeo”?

n. ¿Qué se considera como “comportándose de una manera sospechosa”? ¿Cuáles son las actividades puntuales que el sistema está entrenado para reconocer? ¿Cómo se puede prever una actividad delictiva cuando se da este supuesto?

o. ¿En qué consiste el presupuesto de “ocupación”? ¿Cuántas personas se necesitan como mínimo en un área para que se configure la ocupación? ¿Cuáles son los presupuestos fácticos de forma detallada para que se configure la ocupación? ¿Cuáles son aquellas áreas pasibles de ocupación?

p. ¿En qué consiste la “tolerancia a los falsos positivos” mencionada?

q. ¿Con que sin se recolecta la información acerca de la detección de emoción en el rostro de las personas? ¿Por qué se necesita detectar la emoción del rostro de las personas cuando el sistema sería utilizado exclusivamente para la detección de prófugos?

r. ¿En qué consiste la indexación mencionada? ¿Qué se considera como “persona de interés? ¿Por qué razón se necesitaría registrar aquella información de estas “personas de interés”?

https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhyvzUss83|5qmQHYdlWCoEzPIKU0JAvRZ7kltC74K|7Tw11ctBR9dfFZZZemaLoi969Lwy2BFPNowVGFQ7XOHCTEKW51rAObRlXsdfYAs0SFw==

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.08.15 17:40:11 -03'00'

FORNO CARLOS TRISTAN
Director General
D.G.DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.08.15 17:40:11 -03'00'